

SOLICITO INCIDENTE DE EMBARGO PREVENTIVO.

SR. JUEZ DEL TRABAJO DE LA II° NOMINACION.-

**JUICIO: FERRO SARDI BRUNO C/ AEGIS ARGENTINA S.A S/
COBRO DE PESOS. EXPTE. 298/19.**

SANTIAGO SAL PAZ, por derecho propio y por la representación que ejerzo en autos por el actora, Matricula Profesional N° 5992, T°99 F°127, con domicilio digital en el CUIT N° 23254980099, ante V.S. respetuosamente digo:

Que vengo a solicitar embargo preventivo sobre la cuenta bancaria de la demandada (AEGIS ARGENTINA SA), en las entidades Banco Galicia y Buenos Aires SA, hasta hacer efectivo la suma de pesos en concepto de capital \$423.458,09 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS) acrecidas y honorarios \$ 103.333,60 mas el 10 % de aportes ley 6059, conforme surge de la sentencia de fondo de fecha 29 de Mayo de 2023.

En consecuencia, solicito a S.S que proceda a resolver el embargo preventivo peticionado Ut Supra, como se encuentra expresamente establecido el Art. 291 inc. 1° a) in fine del CPCC supletorio, cumpliéndose los extremos legales para que prospere la medida cautelar peticionada.

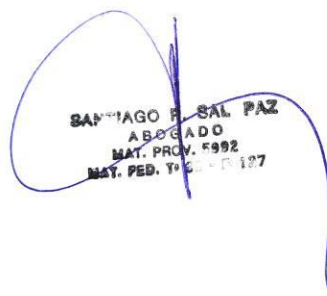
La cautelar requerida, solicito se ordene por el monto de la condena en concepto de capital, honorarios y aportes, más el monto para cubrir las acrecidas que V. S. prudencialmente presupueste.

Asimismo, acompaño copias de la sentencia a fin de que se forme incidente de embargo.-

Por lo expuesto pido se haga lugar al embargo preventivo en la forma solicitada, con costas.-

PROVEER DE CONFORMIDAD

JUSTICA.-



SANTIAGO P. SAL. PAZ
ABOGADO
MAT. PROV. 5992
MAT. FED. T. 127

Expediente: 298/19

Carátula: FERRO SARDI BRUNO C/ AEGIS ARGENTINA S.A. S/ COBRO DE PESOS

Unidad Judicial: JUZGADO DEL TRABAJO II

Tipo Actuación: FONDO

Fecha Depósito: 30/05/2023 - 00:00

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

27307591265 - AEGIS ARGENTINA S.A., -DEMANDADO

23254980099 - FERRO SARDI, BRUNO-ACTOR

27307591265 - ARAMBURU MARIA FLORENCIA, -POR DERECHO PROPIO

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

JUZGADO DEL TRABAJO II

ACTUACIONES N°: 298/19



H103024322880

JUICIO: FERRO SARDI BRUNO c/ AEGIS ARGENTINA S.A. s/ COBRO DE PESOS.- 298/19

San Miguel de Tucumán, 29 de Mayo 2023

AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “**FERRO SARDI BRUNO c/ AEGIS ARGENTINA S.A. s/ COBRO DE PESOS**” que tramitan por ante éste Juzgado del Trabajo de la II Nominación, de donde

RESULTA:

DEMANDA: A fojas 5 se apersonó el letrado Mario E. Choquis y posteriormente su poder fue revocado apersonándose el letrado Santiago Sal Paz en representación de Ferro Sardi Bruno, DNI N° 33.815.672, con domicilio real en Av. Alem 595, Piso 6to, dpto. “G”, de esta ciudad y demás condiciones personales que constan en poder ad litem de fecha 26/02/2021. En tal carácter inició acción por cobro de pesos en contra de Aegis Argentina S.A., por la suma de \$135.305,20 (Pesos ciento treinta y cinco mil trescientos cinco con 20/100 centavos) en concepto de: (i) indemnización art. 245 LCT, (ii) indemnización sustitutiva de preaviso, (iii) SAC sobre preaviso, (iv) SAC proporcional, (v) vacaciones (14 días), (vi) integración mes de despido, (vii) SAC sobre integración mes de despido, (viii) multa art. 1 ley 25.323, (ix) multa art. 2 ley 25.323, (x) diferencias salariales, (xi) vacaciones proporcionales y (xii) haberes mes de diciembre 2016.

En cumplimiento de los recaudos previstos en el art. 55 del Código Procesal Laboral (en adelante: CPL) indicó la parte actora que ingresó a prestar servicios para la demandada en el establecimiento ubicado en calle Alberdi N°165 de la ciudad de San Miguel de Tucumán el día 10/11/2014; siendo las tareas del actor descriptas como: “atención telefónica”, laborando de lunes a sábados de 16:00 a 22:00 pm, descansando los días domingo, laborando seis horas diarias, 36 horas semanales.

Practicó planilla de liquidación (fs. 6).

AMPLIACION DE DEMANDA: En la ampliación de demanda, en lo que considero pertinente, la parte actora precisó que era agente telefónico con líneas rotativas. Agrega que le asignaron la campaña Telefónica 112, donde realizaba ventas de internet, “On video” (Sic.) y atención al cliente.

Que la empleadora le abonó mensualmente a su mandate la suma de \$ 8.447 (sueldo básico), cuando le debería haber abonado \$13.516 (sueldo básico), tal como lo establece la escala salarial del CCT 130/75, existiendo diferencias salariales en razón de haberle liquidado la demandada los haberes de manera deficiente como empleado de jornada parcial, cuando le correspondía percibir sus haberes como empleado Vendedor B, jornada completa (conforme Resolución 782/10 dictada en el marco del expediente 1.352.873/09) más los incrementos establecidos en el art. 201 de la LCT por haber laborado los días sábados después de las 13 horas. En razón de lo expuesto reclamó diferencias salariales por el período no prescripto, más los SAC, teniendo en cuenta la escala salarial del SEOC por cada mes trabajador y reclamado, en comparación de lo efectivamente percibido, como así tampoco se le abono las horas suplementarias.

Bajo el título “Despido Injustificado” expuso que su mandante comenzó a sufrir problemas psicológicos, lo que llevó a que le recetaran licencia médica, indicando que al momento de querer presentarlo a la empresa demandada, ésta no le quiso recibir, debiendo concurrir el actor a la Secretaría de Trabajo, a los fines de que se abra un expediente administrativo a fin de que le realicen los estudios pertinentes para verificar la enfermedad que padecía. Indicó que esta situación provocó que comenzara un intercambio epistolar, el cual fue transcripto.

Expuso que el mismo comenzó cuando la empresa demandada intimó al actor que debía volver a trabajar, y este mediante TCL del 01/12/16, puso en conocimiento de la patronal su imposibilidad de hacerlo en razón de la licencia prescripta por su médico tratante, a lo que la demandada contestó efectivizando el despido por CD de fecha 19/12/2016.

Indicó que de la narración cronológica de los hechos resulta claramente que el distracto resulta injustificado por cuanto el trabador, ante la intimación de la empleadora para que se reintegrara a trabajar (CD del 05/12/2016), este le comunicó la causa de su ausencia al trabajo, tanto de modo previo como posterior a dicha intimación (TCL del 01/12/16 y del 07/12/16), poniendo a disposición de la patronal el certificado médico respectivo, en la Secretaría de Trabajo, ante la negativa a recibir los mismos. Destacó que no hubo silencio del dependiente frente a la previa constitución en mora del empleador.

Indicó que la dolencia que padecía el actor, se trataba de una enfermedad inculpable, razón por lo cual se encontraba gozando de licencia (art. 208 de la LCT). Asimismo expuso que ante la nueva comunicación del trabajador acerca de la continuación de su dolencia (TCL de 01/12/2016) la patronal no ejerció la potestad del artículo 210 de la LCT, ya que habiendo existido disparidad de opiniones de los médicos en cuanto al alta laboral del actor al mes de noviembre de 2016, debió requerir una junta médica de algún organismo oficial que dirimiera la cuestión. En resumen, sostuvo que la continuidad de la enfermedad se encontraba avisada, no controlada y por ende, consentida y justificada.

Asimismo indicó que no puede considerarse causal de abandono de trabajo (incumplimiento al débito laboral) la ausencia del trabajador al empleador, pues el actor dejó exteriorizada su voluntad inequívoca de conservar el vínculo laboral , solo que no pudo concurrir a su puesto de trabajo por una causa justificante que lo imposibilitaba de hacerlo. Pero pese a ello, la patronal decidió despedir al trabajador por CD del 19/12/2016, sin justificación alguna, por lo que el actor resulta acreedor a las indemnizaciones que por ley le corresponden.

Manifestó que el Sr. Ferro Sardi, notificó por medio de telegrama obrero de fecha 01 de Diciembre de 2012, las dolencias que padecía, poniendo a disposición de la contraparte el certificado médico, sin embargo la demandada no realizó los controles por sus médicos facultativos, argumentando que en fecha 22/11/2016 el actor había obtenido el alta médica, limitándose a rechazar la enfermedad y despedirlo. Citó doctrina y jurisprudencia dominante en el tema, que dispone como regla general que en el supuesto que haya controversia entre los médicos del trabajador y del empleador con relación a

la enfermedad que padece el trabajador, tiene siempre preferencia el médico particular del trabajador sobre el médico de la patronal. Adjuntó planilla de rubros reclamados. Ofreció prueba. Formuló petitorio.

CONTESTACION DE DEMANDA: En fecha 05/04/2022 se apersonó la letrada María Florencia Aramburu, adjuntando poder general para juicios, para actuar en nombre y representación de Aegis Argentina S.A con domicilio en calle Juan B. Alberdi N° 165 de ésta ciudad, y contestó demanda solicitando el rechazo con costas a la contraria.

Previo a contestar demanda interpuso excepción de prescripción liberatoria de todos aquellos rubros y/o créditos reclamados por el actor, pues todos tienen su origen más allá del lapso bianual de prescripción liberatoria que regla las relaciones laborales. Indicó las fechas más importantes (19/12/16 despido del actor, 03/03/17 audiencia ante la SET fijándose nueva fecha de audiencia a la cual no comparecieron las partes, 28/09/19 interposición de la demanda, 10/03/21 se notificó de la demanda a Aegis Argentina) y a partir de su descripción sostuvo que el crédito del actor se encuentra prescripto desde el 03/03/19, pues no efectuó intimación, acto administrativo o judicial suficiente para interrumpir su plazo en tiempo oportuno desde esa fecha, solicitando el rechazo in limine de la demanda, con expresa imposición de costas al actor.

Comenzó su contestación negando todos y cada uno de los hechos invocados por la demandada y, particularmente negó los siguientes hechos: (i) que el actor sea acreedor de la suma de \$135.305,20 en concepto de los rubros reclamados en la demanda; (ii) que no se le haya pagado al actor horas extras; (iii) que el actor haya sufrido problemas psicológicos; (iv) que la remuneración devengada difiera de la remuneración efectivamente percibida por el trabajador; (v) que las tareas desempeñadas por el actor le hayan generado un gran desgaste físico y psíquico; (vi) que el actor se haya desempeñado por arriba de las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad; (vii) que el actor debiese haber cobrado durante toda la relación laboral el equivalente a un sueldo jornada completa de vendedor B del CCT 130/75 y (viii) que la demandada deba diferencias salariales.

Luego reconoció únicamente la emisión y recepción de los telegramas y cartas documento intercambiadas entre su mandante y la parte actora.

Posteriormente realizó negativa general, desconociendo la validez y autenticidad de la restante documentación.

A continuación describió la actividad, composición y estructura comercial de la empresa demandada. Luego sostuvo que el Sr. Ferro Sardi ingresó a prestar servicios para su mandante en fecha 10/11/17, finalizando su relación por despido justificado en fecha 19/12/16, sosteniendo que durante toda la relación laboral, se encontró cubierto por la obra social O.S. de Empleados de Comercio, y por la ART Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.

Expuso que el actor no estaba categorizado como “Vendedor B” sino que, tal como surge del sistema de simplificación registral de AFIP, su verdadera categoría fue la “Categoría B - Maestranza y Servicios”, de acuerdo al convenio colectivo 130/75.

Con respecto al despido, sostuvo que el Sr. Ferro Sardi fue despedido con causa, por los motivos claramente expuestos en la CD de fecha 19/12/16, tal como lo reconoce la propia parte actora, luego de un extenso intercambio epistolar. Transcribió carta documento.

Precisó que las manifestaciones del actor y la documental adjuntada por la demandada (v.g. notificación de fecha 19/10/16 firmada de puño y letra por el actor, instándolo a presentarse en el consultorio del Dr. Voight a fin de que AEGIS realice el control médico laboral al que estaba facultado por el art. 210), echan por tierra la falaz afirmación del actor, al decir que se le negó la recepción de

estos. Por otra parte, sostuvo que el procedimiento para aceptación de licencias fue debidamente informado por la demandada al actor, tal como consta de la documental adjuntada a su legajo (N° 514946).

Expuso que como consecuencia del despido se le depositó al actor su liquidación final en su cuenta bancaria y en fecha 20/01/17, precisando que la documentación laboral del art. 80 estuvo a disposición para que el Sr. Ferro Sardi la retire de la empresa, ante su inacción se le envió mediante correo OCA con frente notarial al domicilio del trabajador.

Bajo el título “Jornada de Trabajo” La demandada sostuvo que el actor pretendió controvertir el carácter de jornada reducida que se acordó desde el comienzo de la contratación, sin realizar el más mínimo desarrollo fáctico o jurídico, pretendiendo percibir una diferencia salarial por una jornada completa. En este sentido expuso que no puede considerarse que una persona que trabaje el 72% de la jornada legal tenga derecho a percibir la misma remuneración que una persona que sí lo hace. Expuso que la propia resolución que invoca el accionante es la que le indica que el salario debe abonarse conforme el régimen de “jornada reducida” (art. 198 LCT). Preciso que el criterio para calcular las remuneraciones de los trabajadores de la actividad es el que le proporciona el propio Convenio, el cual determina que el pago tiene que hacerse proporcional.

En este sentido agregó que el actor trabajó bajo las órdenes de la Empresa demandada durante varios años, en los que jamás cuestionó los términos del contrato ni mucho menos efectuó reclamo alguno.

Bajo el título “Denuncia de nuevo convenio aplicable a la actividad: Convenio N° 781/20” expuso que a pesar de que el distracto se produjo antes de la entrada en vigencia del CCT 781/20, su meritución resulta menester en el caso de marras, donde se discute la naturaleza de la jornada de trabajo pactada entre las partes, y su posible carácter de jornada completa o reducida. Preciso que el Convenio Colectivo N° 781/2020 viene a reemplazar al actual CCT N° 130/75, cuya homologación fue publicada el 31 de julio de 2020; y debía aplicarse luego de 90 días de su homologación, lo que -según su criterio- significa que debía aplicarse a partir del 01 de Octubre del 2020.

Sostuvo que, más allá de la interpretación que puedan darle las partes, en el año 2010, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios celebró un acuerdo paritario celebrado en el mes de junio de 2010, homologado por la Resolución 782/10, donde expresamente habilitó la utilización de la figura prevista en el art. 198 LCT para los trabajadores que se desempeñan en las empresas de servicios de *call center* para terceros. Preciso que el CCT 781/20 establece la aplicación de la jornada reducida y el pago de salarios proporcional a la jornada efectivamente trabajada, estableciéndose en la escala salarial el valor que se abonará por cada una de las diferentes jornadas que puede realizar el trabajador.

Expuso que, si bien el mismo no se encontraba en vigencia al momento de la traba de la litis, lo cierto es que este nuevo Convenio Colectivo en realidad no es más que una cristalización de la forma en que las partes signatarias entienden que deben desenvolverse las relaciones laborales, y sustenta contundentemente todas las consideraciones de derecho y encuadramiento convencional y de jornadas que efectuó esta parte al momento de contestar demanda. Impugnó planilla de rubros reclamados. Hizo reserva de caso federal. Ofreció prueba instrumental. Cumplió con acordada N° 236/20. Formuló petitorio.

CONTESTACION DE TRASLADO: En fecha 19/04/2021 y 27/12/2022 la parte actora contestó traslado de prescripción, expresando que los créditos laborales que se reclamaron no se encuentran prescriptos en razón del carácter suspensivo de los telegramas obreros remitidos a la contraparte, como así también el trámite administrativo realizado por ante la Secretaría de Estado y Trabajo de la

provincia de Tucumán, Expte. N° 17463/181 LFS Año 2016.

APERTURA A PRUEBA: La causa fue abierta a prueba en fecha 23/04/2021.

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: En fecha 27/08/2021 rola acta de audiencia de conciliación, la cual se celebró de acuerdo a lo dispuesto en el art. 69 del CPL, asistiendo a ella el letrado apoderado de la parte actora y la letrada apoderada de la parte demandada.

INFORME AL ACTUARIO: El 06/07/2022 está agregado el informe actuarial acerca de las pruebas producidas por la parte actora.

ALEGATOS: Finalizada la etapa probatoria, la parte actora presentó sus alegatos el 02/08/2022 y la parte demandada lo hizo el 17/08/2022.

AUTOS PARA SENTENCIA: En mérito a ello, quedan los presentes autos en condiciones de ser resueltos.

CONSIDERANDO:

ACLARACION PRELIMINAR:

Antes de ingresar al examen resolución de la presente sentencia de fondo, debo puntualizar que todo el trámite de la esta controversia fue sustanciado por las normas del CPL y con la aplicación supletoria de la ley 6176 y sus modificatorias. Por lo tanto, lo primero que debo puntualizar es que por imperio de lo normado en el Art. 822 CPCCT de la ley 9531 y sus modificatorias, la presente sentencia será resuelta conforme a la normativa anterior; es decir, **el CPL y con la aplicación supletoria de la ley 6176 y sus modificatorias**; por cuanto se trata de una juicio íntegramente sustanciado a la luz de los mencionados digestos normativos y se encuentra solamente pendiente el dictado de la sentencia; razón por la cual, corresponde dictar resolución aplicando el articulado de los mismos.

I. HECHOS RECONOCIDOS POR LAS PARTES: Conforme los términos de la demanda y su responde, constituyen hechos admitidos por las partes -expresa o tácticamente- y, por ende, exentos de prueba: 1) la existencia de la relación laboral y la fecha de inicio de la relación: 10/11/2014 y 2) que la extinción de la relación laboral se produjo por despido directo comunicado mediante carta documento con fecha de imposición el día 19/12/2016.

II. CUESTIONES CONTROVERTIDAS O DE JUSTIFICACIÓN NECESARIA: En mérito a todo lo expresado precedentemente y encontrándose los presentes autos en condiciones de ser resueltos, entiende este sentenciante que corresponde determinar cómo puntos contradictorios a tratar aquellos hechos que requieren un previo análisis de la plataforma fáctica de autos y poder así llegar a dilucidar la verdad objetiva del caso, encuadrando los supuestos probados dentro de las normas aplicables al caso concreto.

En consecuencias, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las que debo pronunciarme, conforme el artículo 265, inciso 5, del CPCCT (supletorio) son:

1. Convenio Colectivo aplicable.
2. Características de la relación laboral: Categoría. Jornada de trabajo: su encuadre jurídico.
3. El despido: causa y justificación.
4. Prescripción de los reclamos. En su caso, la procedencia de cada uno de los mismos.
5. Intereses, costas y honorarios.

III. RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN LABORAL: En fecha 05/03/2021 consta agregada a la causa el decreto por el cual se tuvo por adjuntada por la actora documentación original: copia certificada de Telegrama n° CD 763359712 de fecha 1/12/2016, copia certificada de telegrama n° CD 769798399 de fecha 07/12/2016, copia certificada de telegrama n° CD 780673413 de fecha 20/12/2016 y carta documento n° +798849-2 de fecha 20/12/2016.

En fecha 02/06/2021 consta agregada a la causa el decreto por el que se tuvo por acompañada la documentación original por la parte demandada: Contrato de Trabajo en 06 fs.; Notas de fecha 10/11/2014 en 17 fs.; Declaración jurada de domicilio en 01 fs.; Formulario de designación de beneficiarios en 01 fs.; Notificación del régimen de asignaciones familiares en 02 fs.; 01 Fotocopia simple; Notificación de audiencia médica en 01 fs.; 05 Cartas documento; 05 Telegramas Ley 23.789.

Al respecto, debo puntualizar -por un lado- que la documentación que la accionada le atribuye al actor, no fue negada por este en la audiencia conciliatoria (a la cual no se presentó personalmente); por el contrario el actor reconoció en fecha 25/03/2022 (Cuaderno de Prueba de Reconocimiento Demandada N°2) como propia las firmas insertas en los siguientes documentos: contrato de trabajo de fecha 10/11/2014, declaración jurada de domicilio, seguro de vida obligatorio fechado 10/11/2014, declaración jurada de antecedentes penales y laborales, declaración que no trabajó en Call Center de fecha 10/11/2014, contrato mediante el cual el informan sobre la extensión horaria del call center, contrato de confidencialidad de fecha 10/11/2014, informe sobre la vestimenta, acta mediante la cual notifican que debe informar a Aegis la obra social elegida, declaración de hijos y cónyuge, reglamento interno de Aegis, nuevo procedimiento servicio de salud ocupacional, carta oferta de empleo, atestación, recepción de tarjeta de acceso al edificio ubicado en calle Alberdi 165, cheque de banco Patagonia N°91700285 por la suma de \$3004,02, notificación a que se presente a controles médicos de fecha 19/10/2016, telegrama ley de fecha 13/11/2015, telegrama ley de fecha 01/12/2016, telegrama de fecha 22/11/2016, telegrama de fecha 07/12/2016, telegrama ley de fecha 20/12/2016 y audiencia Secretaría de Trabajo de fecha 03/03/2017. Asimismo reconoció recepción de cartas documentos de fecha 19/12/2016, 21/12/2016, 05/12/2016, 26/10/2016 y 30/11/2016.

Consecuentemente, se debe tener por reconocida la documentación que la accionada atribuye a la actora en razón de lo dispuesto por el art. 88 CPL. Así lo declaro.

Respecto a la documentación adjuntada por la actora, también el Art. 88 CPL, indica expresamente que ante la falta de “negativa categórica” de la autenticidad, de los “documentos que se atribuyen a la contraria” (contraparte del juicio), determinará que se tengan por reconocidos. Es decir, la norma - respecto de la prueba documental que se atribuye a la contraria- resulta categórica, en cuanto al “deber de negar o impugnar la autenticidad en forma categórica”, y frente a la omisión de hacerlo (ya sea por no cumplir la carga al contestar, o por incontestar, la demanda; o bien, para el caso del actor en el marco de la audiencia del Art. 71, Confr. Art. 88 inc. 2 CPL), en tales casos, deben tenerse el o los instrumentos “por reconocidos” (documentos que se atribuyen a la contraria), o bien, por “recibidos” (los telegramas o cartas atribuidos a la contraria), por imperio de la ley. Ello, insisto, porque la propia ley procesal lo dice en forma clara, categórica y aseverativa (“determinará que se tenga por reconocido o recibidos tales documentos” Art. 88, 1er. Párrafo, CPL).

En tal sentido, la Jurisprudencia que comparto, dijo: “Si se tiene en cuenta lo determinado por el Art. 88 de la Ley N° 6204, ha de tenerse por auténtica la documentación adjuntada por el actor, en relación a la accionada que incontestó la demanda, atento que dicho artículo establece: "Las partes deberán reconocer o negar categóricamente los documentos que se le atribuyen...El incumplimiento de esta norma determinará que se tenga por reconocidos o recibidos tales documentos" (Cámara del Trabajo - Sala 6 - Gauna Fabiana Elisa vs. Grinland S.R.L. y Otro S/ Cobro de Pesos - Nro. Sent: 61 Fecha Sentencia 27/04/2011 - Registro: 00029752-02; y -con respecto a este tema- entiendo que se

aplica de igual manera a la parte actora, cuando ésta no reconoció o negó categóricamente la documentación adjuntada por la demandada, en su contestación de demanda y en los plazos establecidos por el art. 88 CPL inc. 2.

En el caso, la demandada no ha realizado una negativa categórica y puntual de cada uno de los instrumentos acompañados por la actora, expresando genéricamente: *“En cuanto a la documentación presentada y de la que se otorgó copia para traslado, reconozco únicamente la emisión y recepción de los telegramas y cartas documento intercambiada entre mi mandante y la parte actora. Desconozco en forma categórica la validez y autenticidad de la restante documentación, salvo que coincida con al que esta parte adjuntara en la etapa procesal oportuna..”* (Textual).

Evidentemente, al no identificar ningún instrumento o documento, respecto del cual lo desconozca o impugne su autenticidad, no queda otra alternativa que considerar como una simple negativa genérica y global; toda vez que -insisto- no hace referencia concreta y puntual a ningún instrumento en particular.

Por lo tanto, queda claro el incumplimiento de la carga procesal, y corresponde también aplicar el apercibimiento legal.

En concreto, concluyo en que los efectos previstos por el Art. 88 CPL, también deben aplicarse a la demandada, por su omisión de negar categóricamente cada uno de los instrumentos presentados por la actora, que le atribuye.

Conforme a ello, considero tener por auténticos los siguientes documentos: TCL n°CD656995534 de fecha 13/11/2015, CD n°E7986764-8 de fecha 27/10/2016, TCL n°CD763372489 de fecha 22/11/2016, CD n°E7986828-7 de fecha 20/11/2016, TCL n°CD763359712 de fecha 1/12/2016, CD n°E7986837-9 de fecha 05/12/2016, TCL n°CD769798399 de fecha 7/12/2016, TCL n°CD780673413 de fecha 20/12/2016, CD n°E7986849-2 de fecha 20/12/2016, CD n°E7986852-2 de fecha 22/12/2016, declaración que no trabajó en Call Center de fecha 10/11/2014, informe sobre la extensión horaria del Call Center, contrato de confidencialidad de fecha 10/11/2014, informe sobre la vestimenta, acta mediante la cual notifican que debe informar a Aegis la obra social elegida, declaración de hijos y cónyuge, reglamento interno de Aegis, nuevo procedimiento servicio de salud ocupacional, carta oferta de empleo, atestación, recepción de tarjeta de acceso al edificio ubicado en calle Alberdi 165, informe sobre régimen de sanciones disciplinarias, normas generales, procedimiento de salud ocupacional, notificación del régimen de asignaciones familiares, cheque de banco Patagonia N°91700285 por la suma de \$3004,02, formulario de designación de beneficiarios, notificación a que se presente a controles médicos de fecha 19/10/2016, declaración jurada de domicilio y contrato de trabajo, siempre referida a la documentación que cada parte le atribuye a la contraria, y no alcanzando esta declaración a lo que es documentación emanada de tercero. Así lo declaro.

IV. ANALISIS DE LA CUESTION Y VALORACION DE LAS PRUEBAS. Antes de ingresar al tratamiento puntual de las cuestiones mencionadas, considero importante mencionar que cuando corresponda ingresar al examen, ponderación y valoración de las pruebas, lo haré siguiendo las líneas directrices trazadas por el Máximo Tribunal de la Nación, en el sentido que - como principio- los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas las cuestiones que proponen a su consideración, ni a tratar una por una todas las pruebas ofrecidas y producidas, sino tan solo deben analizar y ponderar las cuestiones y pruebas que consideren relevantes o conducentes para la decisión del caso. En consecuencia, corresponde proceder al análisis de las pruebas presentadas por las partes, recordando que por el principio o juicio de relevancia puede el Jurisdicente considerar sólo aquellas pruebas que tengan relevancia para la solución del litigio (CSJN, in re: “Benítez, Dermidio c/ Compañía Sansinena S.A.”; “Damiani, César M. c/ Rapaport, Samuel”; “Fernández,

González y Tacconi, S.R.L. c/ Madinco S.R.L.”; Torulice o Tortolice, Francisco c/ Blass del Yesso, Domingo”, entre otros, años 1964 publicada en Fallos: 258:304). Este mismo criterio fue reiterado y ampliado en numerosos pronunciamientos posteriores (y aún está plenamente vigente), y deja muy en claro que: “los jueces del caso no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni a tratar todas las cuestiones expuestas y examinar los argumentos que, en su parecer, no sean decisivos” (CSJN - in re: “Ogando, Adolfo -Suc.- c/ Barrenechea, María”, 24/03/1977, Fallos: 297:222; “Traiber c/ Club Atlético River Plate” del 04/07/2003, Fallos: 326:2235, entre muchos otros).

Corresponde entonces, verificar y examinar además de las cuestiones propuestas, el plexo probatorio rendido en autos, para luego ingresar a ponderar y valorar las pruebas que considero conducentes para la resolución del caso. La plataforma probatoria común a todas las cuestiones, obrante en autos, es la siguiente:

PRUEBAS DE LA ACTORA:

IV.1. INSTRUMENTAL: La parte actora en fecha 4/05/2021 ofreció prueba instrumental consistente en la documentación acompañada con su escrito de demanda.

IV.2. INFORMATIVA: En fecha 17/02/2022 la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Tucumán contestó el oficio a él remitido. Esta prueba no fue impugnada por las partes.

En fecha 21/02/2022 la AFIP remitió informe sobre fecha de alta, baja y categoría registrada del Sr. Ferro Sardi. Esta prueba no fue impugnada por las partes.

En fecha 22/02/2022 el Correo Argentino informó la imposibilidad de proceder a cumplir con la autenticación de las misivas adjuntadas.

En fecha 29/03/2022 informó el Apoderado Legal del S.E.O.C. Alejandro Urueña sobre la escala vigente durante el período diciembre 2016 para la categoría de vendedor B CCT 130/75.

IV.3. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACION: En fecha 4/05/2021 solicitó el actor se intime a la demanda a fin de que exhiba los libros de remuneraciones, aportes, registros y planillas exigidos por ley, como así también el legajo N°514956, planilla de ingreso y de salida durante toda la relación. Que habiendo corrido traslado a la demandada, esta no contestó, siendo procedente el apercibimiento 61 y Ctes. CPL. Esta prueba no fue impugnada por las partes.

IV.4. CONFESIONAL: En fecha 27/04/2022 roló acta de audiencia en la cual absolvió posiciones el Sr. Reynoso Pablo Gustavo. Esta prueba no fue impugnada por las partes.

IV.5. TESTIMONIAL-RECONOCIMIENTO: En fecha 28/04/2022 roló acta de audiencia de la testigo Dra. María Rosa Fernández, quien respondió a tenor del cuestionario agregado por el actor en fecha 4/05/2021. Esta prueba no fue objeto de tachas.

IV.6. PERICIAL CONTABLE: En fecha 04/05/2021 el actor ofreció prueba pericial contable, cuyos puntos de pericia fueron contestados por la CPN María del Carmen Massa en fecha 14/03/2020. En fecha 28/03/2022 la demandada impugnó la pericia, indicando que la pericia no toma en cuenta el plazo de prescripción de los créditos laborales, ni la categoría de operario que denunció, como así tampoco la jornada de 30 horas semanales trabajadas por el actor. Asimismo expuso que el dictamen pericial fue realizado en base a la documentación presentada por el actor, incurriendo en contradicciones, no tomando en consideración el contrato de trabajo firmado de puño y letra por el actor.

En fecha 06/04/2022 la perito contadora María del Carmen Massa contestó impugnación.

Es útil recordar que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 351 del CPCyC -aplicable a la especie por la remisión contenida en el art. 14 del CPL-, “El valor probatorio del dictamen pericial será estimado por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por las partes y los demás elementos de convicción que constan en los autos. En su sentencia, el juez podrá apartarse de las conclusiones de los peritos, aun cuando fueran terminantemente asertivas, expresando los fundamentos de su convicción”. En relación a esta temática existe acuerdo doctrinario y jurisprudencial para sostener que los dictámenes técnicos carecen de valor vinculante para el juez. De allí que pueden ser criticados e, incluso, desestimados. Sin embargo, para ello, además de ponderar la conclusión del perito, deberá observar todo el razonamiento y el procedimiento científico que sustenta lo dictaminado. Por supuesto, a la hora de emitir el juicio definitivo, conforme enseñan las reglas de la sana crítica, es preciso evaluar integralmente la prueba pericial con las demás que se hayan ofrecido y producido. Todo lo manifestado, confirma que el magistrado no puede apartarse arbitrariamente de la opinión fundada por un perito idóneo. Para decidir en sentido contrario al dictamen deberá dar razones de entidad suficiente. En otras palabras, el apartamiento sólo resulta válido en tanto se fundamente acabadamente, de modo razonable y según las reglas de la sana crítica (conf. CSJTuc., sentencia N° 885 del 21/10/2013)”. (CSJT - Sala Laboral y Contencioso Administrativo, Loza de Rodriguez Cecilia del Carmen vs. Cía. Papelera Tucumán S.A s/ Daños y Perjuicios, Expte. L80/14, sent. 1097, 28/06/2019)”.

La doctrina es coincidente en señalar que la pericia no es vinculante y que el juez puede apartarse de la misma por razones fundadas. Pero, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos o científicos inobjetables y no existe otra prueba que los desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos de ese tipo de mayor valor, aceptar las conclusiones del peritaje. (cfr. Ricardo Lorenzetti, Responsabilidad Civil de los Médicos, Tomo II, pág. 256, Ed. Rubinzal Culzoni).

Si bien la parte demandada dirige su esfuerzo a cuestionar la labor cumplida por la perito contadora, considero que sus argumentos resultan insuficientes para desvirtuarlo como elemento probatorio, sin que ello implique que este Sentenciante esté obligado a valorarlo.

Vale destacar que el perito ha sido convocado a juicio en razón de sus conocimientos técnicos, de modo que su dictamen resulta de ineludible consideración, máxime cuando las partes se limitan a expresar disconformidad con el dictamen, orientada a descalificar el desarrollo de la labor profesional, de manera imprecisa y sin el rigor técnico necesario que autorice al tribunal a apartarse de sus conclusiones. Conforme a lo dispuesto por el art. 348 del CPCC, esta clase de prueba ha sido reservada para aquéllos que tengan conocimientos especiales en una ciencia, arte, técnica o actividad, de los que carecen los impugnantes. No se aportan elementos técnicos para sustentar las observaciones. En consecuencia, este dictamen será ponderado según las reglas de la lógica y de la sana crítica racional y según sirva conforme a los hechos controvertidos en la causa, por lo que las **impugnaciones se rechazan**. Así lo declaro.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA.

IV.7. INSTRUMENTAL Y DE RECONOCIMIENTO: La parte demandada en fecha 7/05/2021 ofreció prueba instrumental consistente en la documentación acompañada con su escrito de contestación demanda.

En ese mismo acto la parte demandada solicitó se notifique a actora a fin que comparezca a reconocer la autenticidad de la documentación acompañada con la contestación. La actora 25/03/2022 reconoció como suyas las firmas insertas en los siguientes documentos: Constancia de Alta del AFIP con fecha 07/11/2014, contrato de trabajo de fecha 10/11/2014, declaración jurada de domicilio, seguro de vida obligatorio fechado 10/11/2014, declaración jurada de antecedentes penales y laborales, declaración que no trabajó en Call Center de fecha 10/11/2014, contrato mediante el cual

el informan sobre la extensión horaria, contrato de confidencialidad de fecha 10/11/2014, informe sobre la vestimenta, acta mediante la cual notifican que debe informar a Aegis la obra social elegida, declaración de hijos y cónyuge, reglamento interno de Aegis, nuevo procedimiento servicio de salud ocupacional, carta oferta de empleo, atestación, recepción de tarjeta de acceso al edificio ubicado en calle alberdi 165, cheque de banco Patagonia N°91700285 por la suma de \$3004,02, notificación a que se presente a controles médicos de fecha 19/10/2016, telegrama ley de fecha 13/11/2015, telegrama ley de fecha 01/12/2016, telegrama de fecha 22/11/2016, telegrama de fecha 07/12/2016, telegrama ley de fecha 20/12/2016 y audiencia Secretaría de Trabajo de fecha 03/03/2017. Asimismo reconoció recepción de cartas documentos de fecha 19/12/2016, 21/12/2016, 05/12/2016, 26/10/2016 y 30/11/2016.

IV.8. TESTIMONIAL: La demandada ofreció a la testigo Romina Romero, quien estando debidamente notificada no compareció a la audiencia, conforme consta mediante acta de audiencia de fecha 28/04/2022. Esta prueba no fue impugnada por las partes.

V. PRIMERA CUESTION: Convenio Colectivo aplicable.

V.1. La parte actora sostiene que corresponde la aplicación del CCT 130/75, proponiendo que el actor debía estar categorizado como vendedor B en dicho CCT.

V.2. La demandada, por su parte, si bien reconoce que el CCT 130/75 resultaba aplicable, denunció -al contestar demanda- la existencia de un nuevo CCT (781/2020), y expresó que: "Solicitamos que V.S. tenga presente lo manifestado, la nueva normativa específica aplicable a la actividad" (Textual).

Al respecto, debo puntualizar que la demandada ha reconocido -en forma expresa- que el CCT 781/2020 se publicó el 31/7/2020, y que deberá aplicarse -según sus dichos- a partir del 01/10/2020.

V.3. Examinada lo expuesto por las partes, desde ya **adelanto que el CCT 781/2020 no resulta aplicable a la relación bajo estudio**, por los fundamentos que seguidamente expondré. Así lo declaro.

a. En este sentido es importante destacar que la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo n° 14250 y sus modificatorias, en su art. 4° establece que: "*Las convenciones colectivas regirán a partir de la fecha en que se dictó el acto administrativo que resuelve la homologación o el registro, según el caso. El texto de las convenciones colectivas será publicado por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, dentro de los DIEZ (10) días de registradas u homologadas, según corresponda*", y el art. 5 dispone que: "*Vencido este término, la publicación efectuada por cualquiera de las partes en la forma que fije la reglamentación, surtirá los mismos efectos legales que la publicación oficial*".

En el ordenamiento jurídico argentino, **los convenios colectivos adquieren eficacia general desde el momento de su homologación** (Mugnolo, Juan Pablo "Estructura de la Negociación Colectiva" en Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo VII, Dir. Mario Ackerman).

Así lo ha establecido la jurisprudencia, que comparto, cuando dijo que: "*El mentado convenio N°1622 que fuera suscripto entre el S. y C., no reviste el más mínimo análisis en los autos del rubro, toda vez que fue homologado una vez concluida la relación laboral de las partes intervinientes en el presente juicio, por lo que deviene inoficioso expedirme sobre la constitucionalidad o validez de éste cuando en autos no es aplicable, toda vez que las leyes tienen eficacia hacia adelante, no en forma retroactiva, situación que ya fuera resuelto en la incidencia oportuna.* (CAMARA DEL TRABAJO - Sala 5 LEIVA NUÑEZ GEORGINA NATALIA Vs. CITYTECH S.A. S/ COBRO DE PESOS Nro. Expte: 387/19, Nro. Sent: 107 Fecha Sentencia 07/07/2021).

Con ello, no cabe duda de que los convenios de la Ley n° 14250 son acuerdos de voluntades que revisten el valor de una ley, "*pues la voluntad de los terceros está implícita en la voluntad de la categoría profesional. De tal modo aparece (el convenio colectivo) como un contrato por su forma de celebración, pero en*

virtud del acto administrativo de la homologación se convierte en ley -fuente de derecho objetivo- para la actividad profesional o la categoría de trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación” (J.C. “Fernández Madrid: “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, t.I, p. 410).

Sobre la homologación y obligatoriedad de las convenciones colectivas, la Cámara Nación de Apelaciones del Trabajo tiene dicho que *“las convenciones colectivas de trabajo para tener eficacia de tales, requieren la homologación del Ministerio de Trabajo. Ello, para que su obligatoriedad no se limite a quienes lo suscribieron sino para que abarque a todos los trabajadores y empleadores de la actividad”* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II 12/08/1997 Antuña, Víctor c. Ministerio de Defensa -Prefectura Naval-. La Ley 1998-A, 219).

Al respecto, Vázquez Vialard refiere que, como en el caso que nos ocupa, tratándose de un convenio de actividad, *en tanto no ocurra la homologación, éste no compromete a las partes que lo han negociado.* (Vázquez Vialard, Antonio. En Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Relaciones Colectivas. Director Julio César Simón. Coordinador Federico Pavlov. T. II. Vol. IV. Pág. 1005. Ed. La Ley, 2011).

Al decir de Ernesto Krotoschin, *“la homologación tiene efecto constitutivo en cuanto a la obligatoriedad (general, forzosa) de la convención que sin ella sólo tendría valor y eficacia como contrato de derecho común. Teniendo en cuenta el carácter constitutivo de ésta, se entiende que pueda ser negada cuando la convención colectiva contenga cláusulas violatorias de disposiciones legales dictadas en protección del interés general. Pero también es condición necesaria de la homologación que la vigencia no afecte la situación económica de determinados sectores de la actividad, ni signifique un detrimento en las condiciones de vida de la población consumidora. La homologación, es, por lo tanto, un instrumento de gobierno mediante el cual éste no sólo vela por la legitimidad de la convención desde el punto de vista jurídico -aunque serán siempre los jueces quienes tendrán la última palabra al respecto- sino que también lo puede usar para imponer cierta política económica, sobre todo de precios y salarios. La decisión sobre la homologación, es pues, al mismo tiempo, una decisión política que se funda en la limitación de la autonomía colectiva.”* (Krotoschin, E. (1962). Tratado práctico de Derecho del Trabajo: tomo II. Buenos Aires: Depalma, p.736.).

El art. 3° de la Ley 14250 (t.o. 2004) establece entre los requisitos necesarios que debe contener un convenio colectivo de trabajo, el “período de vigencia” (inc. e). Período de vigencia es, en definitiva, el ámbito temporal de aplicación de las cláusulas del convenio y que, como manifestación de la autonomía colectiva, debe ser fijado de común acuerdo por ambas partes. Las convenciones colectivas homologadas rigen “a partir de la fecha en que se dictó el acto administrativo que resuelve la homologación o el registro, según el caso” (art. 5, par. 1° ley 24.250), con lo que es posible conocer con precisión el punto de arranque para la aplicación de sus cláusulas, pero son las partes mismas las que deben fijar el punto de finalización de su vigencia. (Etala Carlos A. “Derecho Colectivo del Trabajo, 3ª ed. Buenos Aires, Astrea, 2017, p. 365/366).

Considero de vital importancia el acto de homologación que realiza el organismo de contralor, como es en este caso el Ministerio de Trabajo de la Nación, ya que estamos en presencia de un acto administrativo bilateral de alcance general, destinado a reglar relaciones laborales obrero-patronales de un grupo de trabajadores comprendidos en un determinado ámbito.

Es decir, teniendo en cuenta lo establecido por la Ley de Convenciones Colectivas y lo referenciado en los párrafos anteriores, corresponde determinar que el CCT 781/2020 recién entró en vigencia -a todo evento- el 01/10/2020, motivo por el cual, teniendo presente la fecha de cese de la relación de trabajo -el 19/12/2016-, me queda claro que el referido convenio colectivo, **no resulta aplicable a la relación de trabajo del presente caso, que se había extinguido con anterioridad a su entrada en vigencia; no resultando factible aplicar retroactivamente una norma (CCT), mucho menos lesionando derechos adquiridos a la luz de la normativa anterior.** Así lo declaro.

VI. Características de la relación laboral: Categoría. Jornada de trabajo: su encuadre jurídico.

Categoría

VI.1. a. El actor afirmó que trabajó para la demandada en la campaña Telefónica 112 (la cual es una empresa de telefonía fija), siendo sus funciones la de atención al cliente y venta de internet, correspondiéndole estar registrada por estas tareas como vendedor B del CCT 130/75.

VI.1.b. La demandada afirmó que la categoría del actor era la de B de Maestranza y Servicios del CCT 130/75.

VI.1.c. Ahora bien, por ser el actor quien invocó un hecho controvertido- que realizó tareas de ventas, a él le correspondía acreditar que así lo hizo, conforme art. 302 del CPCCT, supletorio. Anticipo que el accionante ha acreditado sus dichos. Así lo declaro.

De las pruebas aportadas por las partes se observa que el contrato de trabajo correspondiente al empleado *Ferro Sardi Bruno (legajo n° 514956) adjuntado por la parte demandada en fecha 02/06/2021 en su cláusula segunda expresa: “EL/LA TRABAJADOR/A cumplirá funciones de representante, con la Categoría de vendedor b y percibirá su remuneración de acuerdo al Régimen de Contrato de Trabajo (T.O. 1.976) las leyes laborales vigentes y la convención colectiva de trabajo N° 130/75”. (lo subrayado, me pertenece).* Asimismo, esa es la categoría consignada por la demandada en la carta de oferta de empleo, adjuntada por ésta al contestar demanda.

Del certificado de servicios y remuneraciones agregado por la parte demandada en fecha 02/06/2021 surge que la categoría en la cual lo registro al actor era la de vendedor de B del CCT 130/75.

Mediante expediente administrativo adjuntado por la SET en fecha 17/02/2022 se constata que en el **recibo de sueldo** agregado al mismo, la demandada consignó en el mismo que la categoría del actor era la de Vendedor B.

Por otra parte, el representante de la demandada Reynoso Pablo Gustavo, al absolver posiciones en fecha 27/04/2022 indicó en la posición N°6 “Jure como es cierto que al actor le liquidaban el sueldo como empleado a tiempo parcial” indicó “No es verdad,. El sueldo de todos los trabajadores para ese momento en el que tuvo lugar la relación laboral se liquidaba bajo al categoría administrativo B, del convenio colectivo 130/75, siendo la jornada, jornada reducida”, siendo esa la categoría laboral bajo la cual le liquidaban sus haberes (como indica el perito contador en la respuesta dada a la pregunta N°1 en el CPA N° 6 agregado el informe en fecha 14/03/2020), resultando de ello una evidente contradicción con la categoría laboral denunciada por la demandada en su contestación (Maestranza y Servicios del CCT 130/75), por ello, existiendo contradicciones entre lo denunciado por la demandada y lo aportado como prueba (sobre todo, la instrumental presentada por la propia demandada, e incorporada al proceso), y teniendo en cuenta el plexo probatorio antes mencionado, **considero que se encuentra acreditado que el actor cumplía funciones de ventas, debiendo haber estado registrado en la categoría la de vendedor B del CCT 130/75.** Así lo declaro.

Jornada de trabajo.

VI.2.a Manifiesta el accionante que trabajó para la demandada de lunes a sábados de 16:00 a 22:00 horas (6 horas diarias, 36 horas semanales) descansando los domingos, laborando jornada completa conforme lo dispuestos en resolución n° 782/2010 del Ministerio de Trabajo de la Nación, registrándolo la demandada de manera defectuosa a lo largo de toda la relación laboral, ya que se encontraba registrado como empleado a tiempo parcial, cuando en realidad laboraba jornada completa, sumado a que jamás le abonaron los días sábados con el incremento establecido en el art. 201 LCT. Sin embargo luego sostuvo que las horas suplementarias le correspondían por haber trabajado los días domingos.

VI.2.b La demandada si bien negó que el actor se haya desempeñado por arriba de las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad, no dio su versión de los hechos, razón por la cual se considera que la extensión horaria del actor es la denunciada por la accionante, al no haber brindado su versión de

los hechos respecto de la jornada laboral cumplida por el actor (extensión de la misma, con días y horas) por aplicación del art. 60 CPL. Además, la propia demandada adjunta en fecha 30/04/2021 un contrato de trabajo (con el actor), en cuya cláusula tercera se indica una carga horaria de 30 horas semanales y que el salario devengado se determinará proporcionalmente al tiempo trabajado.

Por otra parte, en la contestación de demanda expresó *“La parte actora, sin la más mínima explicación lógica, pretende controvertir el carácter de “jornada reducida” (en los términos del art. 198 LCT) que se conviniera al comienzo de la contratación sin realizar el más mínimo desarrollo fáctico o jurídico adecuado”,* asimismo expuso que *“... el actor trabajó bajo las órdenes de la Empresa que represento durante varios años, en los que jamás cuestionó los términos del contrato ni mucho menos efectuaron reclamo alguno..”* . Luego sostuvo *“...No resulta aplicable entonces lo dispuesto en grado, en el marco del art. 92 ter de la L.C.T., por cuanto si la extensión máxima semanal es de 36 horas semanales, claramente la prestación de servicios del actor (32 horas y media semanales superiores a los 2/3 partes de esa actividad, encuadra en las previsiones del art. 198 de la LCT y, desde esa óptica, no podía pretender se pague el trabajo como si fuese de 48 horas...”*

Así las cosas, y más allá de la poca claridad de la jornada esbozada por la demandada, me queda claro por aplicación del art. 60 del CPL y las pruebas mencionados, que el actor trabajaba en una jornada superior a las 2/3 partes de la jornada habitual. Se aclara que, pese a las manifestaciones que realizó el actor sobre el hecho de que habría trabajado **horas suplementarias (días sábados)**, lo cierto es que en su planilla **no las reclama y toma como base del cálculo solo el sueldo básico, la antigüedad y el presentismo. Asimismo destaco que su petición no resulta clara ni precisa, en razón de indicar a fojas 2 de su demanda párrafo 4to que laboraba de lunes a sábados, exponiendo a fojas 21, 2do párrafo que laboraba los días sábados y domingos.**

VI.2.c Más allá del apercibimiento aplicado a la demandada, es importante recordar que, la controversia esencial entre las partes versa sobre la calificación jurídica de la “jornada de trabajo” que cumplió el Sr. Ferro Sardi (y la remuneración respectiva), para lo cual se torna necesario analizar el sistema diseñado por la Ley de Contrato de Trabajo.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en las causas *“Concha Alejandro Miguel vs. Walmart S.R.L. s/Cobro de pesos”*, Sentencia nro. 1297 de fecha 05/09/2017; *“Jiménez Vanesa Patricia vs. Centros de Contactos Salta S.A. s/ Cobro de Pesos”*, Sentencia nro. 110 de fecha 20/02/2018; y, en la más recientemente causa: *“Casado María Sofía c/Citytech S.A. y Telecom Personal S.A. s/Cobro de Pesos”*, Sentencia nro. 1615 de fecha 13/09/2019, se expidió sobre el tema en debate, en su relación con el alcance de lo normado en los artículos 92 ter y 198 de la LCT, descartando la existencia de un supuesto de concurrencia conflictiva.

Señaló la Corte que el artículo 92 ter de la LCT configura una disposición definitoria de una modalidad contractual: el contrato a tiempo parcial, cuya característica principal es la reducción de la jornada “habitual de la actividad” diaria o semanal inferior a las 2/3 partes. Mientras que, el art. 198 LCT, en cambio, no es una norma definitoria entendida como una disposición que estipula una modalidad contractual como “contrato de trabajo de jornada reducida”. Tampoco él define a la “jornada reducida”, sino que luce como una norma de competencia, es decir: una regla que identifica qué autoridades jurídicas se encuentran facultadas para producir, en condiciones de validez, contratos de trabajo en los que el elemento estructural “jornada” se pacte por debajo de la jornada legal. Destacó que cuando se realiza una reducción de los máximos legales mediante alguna de las fuentes autorizadas por el art. 198 de la LCT, con virtualidad para repercutir de modo general en las relaciones laborales de los trabajadores de determinado sector o actividad, no se está haciendo más que fijar un nuevo tope máximo para la jornada de ese sector o actividad en particular, definiendo una jornada habitual específica.

En lo que concierne a la cuestión debatida en la litis, Nuestro Superior Tribunal Provincial, en forma esclarecedora, expuso que el art. 198 de la LCT autoriza una reducción de la jornada máxima legal según lo prevean las normas reglamentarias nacionales, la voluntad de las partes en un contrato

individual o las convenciones colectivas de trabajo, la que puede, a su vez, disponerse en más o en menos de 1/3 de la jornada habitual de la actividad, siendo que si resulta inferior a los 2/3 queda comprendida en la modalidad de contratación a tiempo parcial y el salario puede ser reducido en proporción; caso contrario, se verifica un supuesto de jornada reducida sin posibilidad de modificar la remuneración.

En otras palabras, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo existen dos tipos de contratos -y dos subespecies dentro de uno de ellos- a los efectos remuneratorios, tomando como elemento distintivo la intensidad o duración de la jornada de trabajo, a saber: a) contrato a jornada completa, definido implícitamente como aquél en el que la jornada laborada por el dependiente coincide con la habitual de la actividad, y b) Contrato a jornada reducida. Esta última especie está integrada, a su vez, por: b.1) Contrato a tiempo parcial: se define explícitamente como aquél que tiene prevista una jornada inferior a las 2/3 de la jornada habitual de la actividad, y b.2) Contrato a jornada reducida que iguala o excede la mencionada fracción.

En relación a este tema se pronunció -además de los fallos del Máximo Tribunal antes mencionados- la Excm. Cámara Laboral, Sala V, en los autos caratulados: "Díaz Mauricio Gabriel vs. Atento Argentina S.A s/Cobro de Pesos" (sentencia de fecha 30/07/18). En dicho pronunciamiento, en el voto de la Dra. Bisdorff se señaló que la jornada habitual para los trabajadores de las compañías de call center es de 6 horas diarias y 36 horas semanales y en función de este parámetro debe juzgarse si en el caso concreto se supera el tope de las 2/3 partes previsto en el art. 92 ter de la LCT. Explicó que para estos casos las 2/3 partes de la jornada habitual equivale a 24 horas semanales, por lo que para entender que un trabajador de call center cumple una jornada a tiempo parcial (art. 92 ter de la LCT) tendría que trabajar por debajo de las 24 horas semanales.

En el caso de marras, corresponde tener presente que la **Resolución N° 782/10** del Ministerio de Trabajo de la Nación homologó un acuerdo celebrado entre las partes signatarias del CCT 130/75, en el que se dispone que: *"Ratificando las condiciones especiales en las cuales desarrollan su actividad los trabajadores que se desempeñen en las empresas de servicios de call center para terceros y conforme las previsiones del art. 198 LCT, las partes convienen que dichas empresas podrán contratar personal para prestar estas tareas en un régimen de **jornada laboral de hasta seis días por semana, laborables de 6 horas diarias corridas y hasta un tope de 36 horas semanales**".* Incluso, la propia demandada reconoce la existencia y dictado de la misma; aunque la interpreta en un sentido que no comparto, como quedará claro más adelante.

Así, lo señalado evidencia que mediante una de las fuentes autorizadas por el art. 198 de la LCT se redujo el máximo legal para la actividad de call center, de 8 horas diarias o 48 semanales a 6 horas diarias o 36 horas semanales, siendo este último tope la jornada habitual y propia de la actividad. Es decir, se puede concluir que en la actividad propia que nos ocupa (vendedor en un call center, siendo su actividad la de un telemarketer), **la jornada de 6 horas diarias y 36 semanales, es ni más ni menos, que la jornada habitual y máxima legal para todos los trabajadores de empresas de call center.** Sobre esta base, todo trabajador/a que cumple esa carga horaria igual o superior a las dos terceras (2/3) partes de la misma **se encuentra vinculado por un contrato de trabajo a tiempo completo;** y -como tal- tiene derecho a percibir el total de la remuneración prevista en la escala salarial aplicable para la categoría profesional que revista. En el presente caso, **el total de haberes previstos para una jornada completa** de la categoría de **"Vendedor B" del Convenio Colectivo 130/75.**

En tal sentido se ha dicho que *no luce razonable, justo ni equitativo tomar el salario correspondiente a un convenio colectivo que comprende numerosísimas actividades, como es el 130/75, y luego aplicarle la proporcionalidad con relación a la jornada que pretende calificar como reducida cuando a la vez admite que esa jornada es la normal y habitual de la actividad call center* (CNAT, 2011, "Rumán Edgardo Abel c/Teletech Argentina SA s/Despido".Expte. 50624/10). También se ha considerado que: *"Si la jornada laboral de los que cumplen tareas de "call center" es de 36 horas, la remuneración no podrá ser otra que la*

correspondiente a la categoría profesional prevista por la CCT 130/75. Otra solución implicaría una quita proporcional a quienes cumplen esa labor para justificar el pago de una jornada reducida como si se tratara de una jornada a tiempo parcial cuando, en el caso, fue admitido por la propia empleadora al contestar agravios, que se trata de la jornada habitual y completa, en tanto que la actora trabajaba 33 horas de las 36 semanales previstas conforme a la Resolución Ministerial 782/10” (CNAT sala X, sentencia de fecha 14/08/2014 in re Ferrán Amarilla, Romina Guadalupe vs. Clienting Group S.A. y otro s/ Despido).

VI.2.d En otras palabras, en el caso particular, se ha declarado que el actor cumplió sus tareas **durante jornadas superiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad (call center de 36 horas semanales)**; razón por la cual no puede existir ninguna duda que el actor era acreedor al pago de una JORNADA COMPLETA.

Teniendo presente todo lo antes expuesto, y en razón de la Doctrina Legal de nuestro Superior Tribunal de Justicia, cabe concluir que el accionante no era un trabajador con contrato de jornada reducida, ni tiempo parcial, ni que debía percibir un salario proporcional por sus horas trabajadas; sino que ha quedado claro que su tiempo de prestación de servicios **era superior a las dos terceras (2/3) partes de la jornada normal y habitual de la actividad**; correspondiendo, por lo tanto, que se le hubiese abonado **íntegramente el importe correspondiente a la “jornada completa” de la categoría laboral Vendedor B conforme al CCT 130/75**. Así lo declaro.

VII. SEGUNDA CUESTIÓN. El despido: causa y justificación.

VII.1. En la demanda el actor expuso que al comenzar a sufrir problemas psicológicos, su galeno le recetó licencia médica, y no siendo recibido el certificado médico por la empresa demandada al momento de querer presentarlo, debió concurrir a la Secretaría de Trabajo a los fines de presentarlo, abriéndose un expediente administrativo para que le realicen los estudios pertinentes para verificar la enfermedad que padecía. Expuso que, ante la ausencia del actor a su puesto de trabajo, la empresa demandada lo intimó a que se reintegre a trabajar, lo cual fue imposible (por enfermedad), comunicando a la demandada mediante TCL del 01/12/16 tal circunstancia, a lo que ésta última contestó efectivizando el despido por CD de fecha 19/12/2016, argumentando dos altas médicas (fecha 26/10/2016 y 22/11/2016). Indicó que la dolencia que padecía el actor, se trataba de una enfermedad inculpable, razón por lo cual se encontraba gozando de licencia (art. 208 de la LCT). Asimismo, expuso que ante la nueva comunicación del trabajador acerca de la continuación de su dolencia (TCL de 01/12/2016) la patronal no ejerció la potestad del artículo 210 de la LCT, ya que, habiendo existido disparidad de opiniones de los médicos en cuanto al alta laboral del actor al mes de noviembre de 2016, debió requerir una junta médica de algún organismo oficial que dirimiera la cuestión. En resumen, sostuvo que la continuidad de la enfermedad se encontraba avisada, no controlada y por ende, consentida y justificada, motivo por el cual el despido resulta injustificado, más aún cuando el actor dejó exteriorizado en todo momento su voluntad inequívoca de conservar el vínculo laboral, solo que no pudo concurrir a su puesto de trabajo por una causa justificante que lo imposibilitaba de hacerlo.

Por su parte la demandada expresó que el Sr. Ferro Sardi fue despedido con causa, por los motivos claramente expuestos en la CD de fecha 19/12/16. Preciso que las manifestaciones del actor, como así también la documental adjuntada por la demandada (v.g. notificación de fecha 19/10/16 firmada de puño y letra por el actor, instándolo a presentarse en el consultorio del Dr. Voight a fin de que AEGIS realice el control médico laboral al que estaba facultado por el art. 210), echan por tierra la falaz afirmación del actor, al decir que se le negó la recepción de estos. Por otra parte, sostuvo que el procedimiento para aceptación de licencias fue debidamente informado por la demandada al actor tal como consta de la documental adjuntada a su legajo (N° 514946).

También tengo presente que dicha carta de despido, quedó incorporada al proceso y se declaró auténtica y recibida.

VII.2. En ese contexto, estando reconocido por el actor que recibió la misiva del despido (sello fechador de emisión el 20/12/2016), y dado que no existe informe sobre la fecha de efectiva entrega de la misma, considero que corresponde apartarse de la teoría de la recepticia que rige en la materia, y tener por perfeccionado el distracto en la fecha de la “emisión” de la carta Andreani; es decir, tener como fecha del despido el 20/12/2016. Así lo declaro.

VII.3. Luego de definida la fecha del distracto de la relación laboral (ocurrida el 20/12/2016), corresponde analizar y decidir sobre la justificación, o no, del mismo; para lo que resulta necesario verificar las posturas asumidas por las partes, y las reglas de la carga de la prueba.

Así tenemos que: En fecha 20/12/2016 la demandada remitió carta documento +7986849-2 al actor comunicando la extinción de la relación laboral en los siguientes términos: *“Acusamos recibo de su TCL CD N° 76798399 y rechazamos la misma por ser palmariamente improcedente en todos y cada uno de sus términos. Ratificamos todo y cada uno de los términos de nuestras anteriores misivas en especial que Ud. se encuentra apto y en condiciones normales de prestar sus tareas normales y habituales desde el día 22/11/2016.- Rechazamos que la empresa se haya recibir supuesto certificado médico que transcribe, el cual rechazamos por no constarnos su autenticidad. Asimismo y teniendo en cuenta que a) El Dr. Rene Federico Voigt dictaminó que a partir del día 26/10/2016 Ud. se encontraba apto para reincorporarse a sus tareas habituales, otorgando alta laboral; b) En base a la discrepancia existente entre el entendimiento del mencionado profesional y su médico particular, la empresa decidió recurrir a una nueva opinión médica, para lo cual se lo citó a examen con el Dr. Pablo Herrera quien, en fecha 22/11/2016 dictaminó que Ud. se encontraba apto para trabajar, c) Con fundamento en las dos altas médicas dictaminadas por los profesionales mencionados, la empresa le cursó una intimación para que retomara sus tareas bajo apercibimiento de proceder a su despido con causa por incumplimiento de su débito laboral (CD Andreani E79868379 d fecha 05/12/2016 recibida por Ud. el día 06/12/2016); d) considerando el hecho de que al día de la fecha Ud. continúa sin presentarse a trabajar, pese de haber sido intimado a hacerlo, le comunicamos su despido con justa causa -en los términos del Art. 212 del LCT- por incumplimiento de su débito laboral...”*.

De ese modo, me parece claro que la decisión de ruptura de la demandada, **estuvo motivada en haberse ausentado el actor a su puesto de trabajo pese a haber sido intimado a reintegrarse en razón de haber obtenido dos altas médicas**; dejando aclarado que no se invoca “abandono de trabajo”, sino simplemente “no presentarse a trabajar, pese a haber sido intimado” que implican “incumplimiento de su débito laboral”, a tenor de la misiva rupturista.

VII.4. De la lectura y análisis del TCL rupturista, luce acreditado el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 243 de la LCT, respecto de la forma de comunicación de la decisión de extinguir la relación laboral en términos claros y precisos, en cuanto se identifica con claridad la justa causa invocada.

Nuestro más Alto Tribunal de Justicia local ha dicho que: *“...el art. 243 de la LCT determina como requisito que el despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deben comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Finalmente, la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas no podrá ser modificada ante la demanda que promoviére la parte interesada. Los dos primeros requisitos señalados, conciernen a la calificación del acto y sus consecuencias; su inobservancia por parte del empleador transforma al despido en incausado, con las consiguientes responsabilidades indemnizatorias. El tercer requisito -la invariabilidad de la causa del despido- refiere al conocimiento de ésta por parte del sujeto afectado en procura de preservar el principio de buena fe y proteger la integridad del derecho de defensa de la parte denunciada, a fin que no sea sorprendida en el acto de traba de la litis, con la invocación de motivos distintos a los consignados en la comunicación documentada del distracto. Sobre el particular, se ha dicho que constituye una carga del empleador especificar con claridad, al comunicar el despido, la justa causa en que se funda, ya que de no ser así no tendrá luego la posibilidad de alegación o complementación en el juicio”* (CSJT, Roldan Adriana Dolores vs. Instituto San Pedro S.E 1019 s/ Cobro de Pesos, 13.11.2006).

En definitiva, debe quedar claro que la **demandada despidió al actor en razón de considerarse injuriada por que el actor incurrió incumplió su débito laboral, al no presentarse a trabajar pese a haber sido intimado, porque -según la demandada- se encontraba en condiciones de hacerlo.**

VII.5. La gravedad de la injuria que se invoca en sustento del despido debe ser analizada objetivamente, es decir, independiente de la apreciación subjetiva de las partes y su valoración es privativa del juez, la que debe ser analizada desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo.

Al respecto, el artículo 242 de la LCT, aplicable al *tema decidendum*, conceptualiza la justa causa de resolución del contrato de trabajo: “...*La justa causa o injuria es un motivo legal de denuncia consistente en el incumplimiento grave de deberes contractuales propios de la relación de trabajo (deberes de prestación o de conducta). Es un ilícito (grave) contractual. Es todo acto u omisión contrario a derecho que importe una inobservancia de deberes de prestación o de conducta, imputable a una de las partes, que lesione el vínculo contractual... El párrafo último del artículo otorga a los jueces la facultad de apreciar la existencia de la injuria. Ahora bien, en la apreciación de la injuria, el juez no podrá aplicar un criterio completamente personal, sino que su libre arbitrio se halla restringido por los criterios y convicciones generalmente aceptados en el ambiente. No cualquier incumplimiento contractual configura una injuria en el sentido del artículo. Debe tratarse de una inobservancia que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación*” (Etala Carlos Alberto, Contrato de Trabajo, p. 645/648”).

De otro modo, se ha definido la injuria como un acto u omisión contrario a derecho que importe una inobservancia de deberes de prestación o de conducta, imputable a una de las partes, que lesione el vínculo laboral. Asimismo, se ha considerado que tres son los presupuestos de hecho que deben concurrir para considerar que se ha producido injuria laboral: un comportamiento antijurídico, manifestado como incumplimiento de una obligación expresa o implícitamente impuesta por la naturaleza del vínculo laboral a la parte a la que se dirija el reproche; la imputabilidad de tal inobservancia a la parte que se considere incumplidora; la afectación de la relación de trabajo. (conforme Ackerman, Mario E. *"Sobre la denominada valoración judicial de la "gravedad" de la injuria"*. Procedimiento Laboral III. Rubinzal- Culzoni Editores, Año 2008 / N° 1 / Pag. 87/96. Según la jurisprudencia, la injuria que es específica del derecho del trabajo, para erigirse en justa causa de despido, **debe consistir en un incumplimiento de tal magnitud, que pueda desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el Art. 10 de la L.C.T., teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad** (en tal sentido: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I, 31/3/2010 “*Frías, Cintia Vanina vs. Chang Ki Paik y otro*”, DT 2010 (junio), 1493).

Dicho esto, cabe destacar que quien decide la ruptura del vínculo laboral **tiene la carga de probar la justa causa del distracto**, es decir, la existencia de la conducta injuriosa invocada como justificación de dicho acto rescisorio, debiendo el juez valorar dicha causal a la luz de las reglas de la sana crítica, tomando en consideración el carácter de las relaciones laborales, sus modalidades y circunstancias personales del caso. Esto significa que debe probarse la existencia de un obrar contrario a derecho o un incumplimiento con magnitud injuriosa suficiente como para desplazar el principio de conservación del contrato de trabajo (art. 10 de la LCT).

VII.6. Para decidir si el despido directo resultó ajustado a derecho, deviene necesario analizar -en forma preliminar- la conducta previa asumida por las partes (conf. prefijeza judicial, art. 243 LCT) por cuanto surge del relato de los hechos -y de la prueba producida en la causa- **que el trabajador venia gozando de licencia médica (lo cual surge de las cartas documentos remitidas por la demandada al actor).**

6.a. También en forma preliminar, debo declarar que los certificados médicos arrimados al proceso (presentados ante la Secretaría de Trabajo) **no serán valorados como prueba instrumental, porque si bien la parte actora produjo testimonial de reconocimiento de documentación emanada de tercero en fecha 04/05/2021 (CPA N°5); los originales de los mismos no fueron presentados a la galeno (Dra. María Rosa Fernández) para su reconocimiento. No obstante ello, la profesional declaró como testigo y contestó el interrogatorio ofrecido por el actor, donde expresó que el actor, Sr. Ferro Sardi, en el mes de diciembre de 2016 tenía trastorno de ansiedad (que lo describe en su respuesta n° 5), con impedimento para trabajar. La testigo no fue tachada por la parte demandada. Sobre el tema, volveré infra.**

Respecto a los certificados (como documental emanada de tercero), destaco que al tratarse de documentación emanada de terceros (los médicos), no era necesario que ninguna de las partes desconociese la misma (presentada por su contraria), ya que el Art. 88 CPL obliga a reconocer o desconocer, la documentación que “se atribuye a la contraria”, y esta “carga procesal” no se aplica respecto de la documentación emanada de un tercero (en el caso los médicos).

Al respecto, la Jurisprudencia que comparto, tiene claramente dicho que: *“Por otra parte, y en concreta relación a los documentos de terceros, esta Corte tiene dicho que “La doctrina es conteste en afirmar que el demandado tiene la carga de reconocer o desconocer los documentos que se le atribuyen pero no respecto de aquellos que emanen del actor o de terceros (cfr. Gozaíni, Osvaldo A.: 'Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado', T. II, pág. 296; Arazi-Rojas: 'Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado', T. II, pág. 230; etc.), y que resulta arbitrario asignar un sentido negativo al silencio del accionado, que no tenía obligación de expresarse sobre el particular -doctrina del art. 919 del Código Civil- (cfr. CSJT, 'Leone, Alfio vs. López, Rosauro Antonio y otro s/ Acción posesoria', sentencia N° 325 del 19/4/2006; 'Santucho Mauro Saúl vs. Caja de previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán s/ Nulidad de resolución', sentencia N° 57 del 27/02/2007). Indudablemente idénticos principios resultan aplicables respecto del actor cuando, como en el caso, se trata de documentos emanados de terceros. Esta Corte tuvo oportunidad de expresar en los referidos precedentes que ‘...incumbe a la parte que presenta en juicio tales documentos, acreditar la autenticidad de los mismos, que las firmas pertenecen a los sujetos a quienes se atribuyen y la veracidad del contenido (cfr. Palacio, Lino: 'Derecho Procesal Civil', T. IV, pág. 442). Y tratándose de instrumentos firmados, el ordenamiento jurídico impone citar para el reconocimiento de firma a quien pretenda atribuirse la suscripción del mismo (arts. 1026, 1028 1029 y 1031 del Cód. Civil); diligencia que debe ajustarse a las formalidades previstas por las normas de rito (art. 346 [actual 337] del CPCC)’. Esta última norma (de aplicación supletoria en el fuero conforme al art. 14 del CPL), bajo el título 'Reconocimiento de Terceros', establece que 'Los instrumentos privados emanados de terceros, que no sean parte en el juicio ni sucesores de las partes, deberán ser reconocidos en la forma que se determina para la prueba testimonial’.* “Respecto de documentos emanados de terceros y aducidos como prueba contra una de las partes del proceso, Hernando Devis Echandía sostiene: ‘Cuando son simplemente declarativos, es decir, documentos en los cuales terceras personas hacen constar hechos que no implican actos dispositivos de voluntad, por ejemplo, una carta en la cual un tercero le informa a una de las partes que le constan ciertos hechos de la parte contraria, y también esas narraciones que a veces obtienen los abogados de los testigos que el cliente les lleva, sobre los hechos que discutirán en el proceso. Para que estos documentos declarativos presten mérito probatorio, es indispensable que sus autores concurren al proceso a declarar sobre tales hechos, mediante testimonios con las formalidades normales. No es una ratificación, porque es un simple documento declarativo y no un testimonio previo. Es decir, no se les debe preguntar si es cierto lo que se dice en el documento, sino que se les debe interrogar sobre los hechos narrados. Cumplida esta formalidad, el juez debe apreciar conjuntamente el documento y la declaración, como un simple testimonio. Esta norma se aplica a lo laboral y contencioso administrativo (Compendio de la prueba judicial, T. II, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2000, pág. 244)’” (CSJT, Bettolli César Octavio de Jesús vs. Asociación Mutual Juramento s/ Indemnizaciones”, sentencia N° 84 del 02/3/2012; en idéntico sentido, “Gómez, Pablo Daniel vs. Tiburcio Sanz S.A. s/ Indemnizaciones”, sentencia N° 989 del 20/11/2013)” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo - HEREDEROS DE JIMENEZ JULIO MIGUEL Vs. SARUF JOSE ANTONIO S/ COBRO DE PESOS - Nro. Expte: L717/14 - Nro. Sent: 1592 Fecha Sentencia: 26/10/2018).

7. Ahora bien, previo a expedirme sobre el despido (en concreto), es necesario precisar que la parte actora comunicó a la demandada mediante TCL de fecha 22/11/2016 que se encontraba de licencia por enfermedad desde el 11/10/16 en los siguientes términos: *“...Intimo a Ud. reconocimiento de Licencias Médicas oportunamente recibida por Uds. por las cuales se debe otorgarme licencia con goce de haberes desde 11/10/16 por 20 días- hasta el 31/10/16, y de la licencia médica recibida Uds, que me concede desde el 15/11/16 al 30/11/16. Rechazo impugnaciones de certificados médicos reduciendo el número de días concedidos por lo que formulo reserva de reclamar pago de haberes que me fuesen descontados...”*

Asimismo, mediante TCL de fecha 01/12/2016 y 07/12/2016 manifestó que no se encontraba en condiciones de reintegrarse a trabajar en razón de su licencia (cuya extensión invocó mediante TCL de fecha 01/12/2016), e indicó que ante la negativa de la demandada a recepcionar certificado médico le comunicó que el mismo se presentó ante la Secretaría de Trabajo.

En este punto me permito hacer una aclaración importante, y es la relacionada a los telegramas remitidos por el actor a la demandada, los cuales se declararon auténticos en virtud de su reconocimiento por la parte demandada al contestar demanda, ello conforme lo dispuesto por el art. 88 CPL.

7.a. Respecto a la manera en cómo debe notificar la enfermedad el trabajador, nuestra CSJT sostuvo *“El artículo 209 de la LCT,... dispone que, salvo casos de fuerza mayor, el trabajador deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar donde se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir; y que, mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración, salvo que la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter o gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. La doctrina ha enseñado, al respecto, que “El plazo general para efectuar la comunicación es exiguo (...), pero aparece flexibilizado por una serie de excepciones que justificarían la comunicación dentro de un plazo superior: a) en los casos de fuerza mayor, y b) en los casos de urgencia y gravedad. En ambas situaciones si la enfermedad fuera 'inequívocamente acreditada' se adquiere el derecho al cobro de los salarios en forma retroactiva. (...) Con la comunicación al empleador, la norma impone otro requisito al dependiente: la obligación de denunciar el lugar donde se encuentra el trabajador enfermo o accidentado. Ello a fin de que pueda realizarse el debido control del estado de enfermedad a que se refiere el artículo 210 de la LCT (...). 'La disposición no exige una forma determinada de efectuar el aviso, y por tanto puede ser realizado por cualquier medio, e incluso no necesariamente por el propio trabajador (...) sino también por familiares, compañeros de trabajo, en forma telefónica, por correo electrónico, telegrama (...) o cualquier otro medio. (...). 'Tampoco se requiere la acreditación de la enfermedad o del accidente con certificados médicos, ni tampoco se exige que se individualice o precise la afección que padece. El único requisito constituye la obligación de dar aviso en la primera jornada y luego someterse al control del médico que la empresa designe. (...). No obstante ello, en los casos en que no se hubiera dado aviso en tiempo oportuno, es decir dentro de la primera jornada de trabajo, por razones de urgencia o gravedad, el trabajador debe necesariamente acreditar con los certificados médicos correspondientes su estado de enfermedad, a fin de justificar la misma y ser acreedor a los salarios respectivos. (...). 'Como hemos dicho, la falta de aviso al empleador, salvo fuerza mayor o en casos graves o urgentes (que operan como eximentes), tiene como sanción correlativa el no pago de los salarios durante todo el lapso en que hubiera faltado sin aviso (...). '(...) la ley impone al trabajador la obligación de someterse al control médico por parte del empleador con el objeto de que éste pueda por un lado conocer cabalmente la dolencia y grado de afección que padece su empleado, dando origen así a los derechos y obligaciones que recíprocamente se tienen las partes en estos supuestos, pero también con el objeto de que el empresario pueda organizar o reorganizar las tareas dentro de la empresa, para afrontar del mejor modo la ausencia del dependiente. (...) En suma, del juego armónico de los artículos 209 y 210 de la LCT, los posibles comportamientos y consecuencias aparejadas para las partes frente a la aparición de una enfermedad con accidente inculpable son las siguientes: 'i) El trabajador no da el aviso correspondiente. Por tanto pierde su derecho a la percepción de los salarios durante su ausencia por la enfermedad, salvo que se trate de casos de fuerza mayor o urgentes, que permitirán la justificación fehaciente y posterior de la imposibilidad de concurrir al trabajo.”* (cfr. Ojeda, Raúl Horacio -Coordinador-, “Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada”, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2011, t. III, págs. 97 a 104). DRES.: POSSE (EN DISIDENCIA PARCIAL) - GOANE - SBDAR (EN DISIDENCIA PARCIAL) - ESTOFAN - GANDUR. (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo - MEDINA FRANCISCO MARINO Vs. CARAM ROQUE ALBERTO S/ COBRO DE PESOS - Nro. Sent: 1514 Fecha Sentencia 19/10/2018 - Registro: 00054165-01).

7.b. A mayor abundamiento, debo destacar que lo sustancial sobre esta cuestión, es la obligación impuesta por el art. 209 de la L.C.T. al trabajador, la cual es la de dar aviso al empleador de la enfermedad o accidente en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir al trabajo. Y que la **sanción legal por el incumplimiento de este deber legal**, siempre según este artículo de la L.C.T., es que mientras no lo haga perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada.

Es decir, que la legislación laboral no le impone al trabajador la obligatoriedad de presentar al empleador el certificado médico acreditando su estado de enfermedad, sino que solamente, y como lo he señalado más arriba, le exige que le comunique (efectuar el aviso) a su principal la enfermedad o accidente en el transcurso de la primera jornada laboral, so pena de perder los salarios mientras que no cumpla con este débito legal.

Por su parte, es el patrono el que si lo considera conveniente o necesario, puede recurrir al derecho que le confiere el art. 210 L.C.T. y a la facultad de controlar la enfermedad o accidente del trabajador, encontrándose el empleado obligado a someterse a tales controles por parte del facultativo designado por su empleador,.

Vista la cuestión desde este ángulo, elementales principios de lealtad, colaboración, solidaridad y buena fe que en nuestra disciplina se encuentran receptados legislativamente en los arts. 62 y 63 de la L.C.T., considero que la demandada tenía el deber -luego de recibir el aviso de la enfermedad- de realizar el control médico (dispuesto en el art. 210 de la L.C.T.), y su omisión en cumplir con el mismo (cuyo efectivo cumplimiento no está acreditado en autos), de ningún modo puede eximirla de dar cumplimiento con sus obligaciones legales (entre otras, la de abonarle las remuneraciones). No desconozco, ni dejo de tener en cuenta, la nota firmada por el actor (fecha 16/10/2016), donde se le notifica que debía concurrir a calle Gral Paz 865, donde sería atendido por el Dr. Voigt quién realizaría su control médico. Sin embargo, también me parece necesario puntualizar -desde ya- que la demandada alegó que el actor se encontraba “apto para trabajar a partir del 26/10/16 - ver Carta Adnreani del 27/10/16), según lo habría dictaminado por el Dr. Voigt, pero dicho informe o dictamen no fue incorporado como prueba; mucho menos reconocido por el profesional. Sobre el tema, volveré más adelante, al tratar las misivas por las que la demandada intima al actor a presentarse al trabajo.

7.c. Conforme los parámetros expuestos por nuestro Máximo Tribunal, es necesario precisar que:

7.c.1. En primer lugar el actor en fecha 22/11/2016 comunicó a la empleadora (mediante TCL n° CD763372489) que se encontraba de licencia desde el 11/10/16. Asimismo es necesario destacar que la mencionada licencia fue renovada, comunicando a la demandada mediante TCL de fecha 01/12/16 y si bien no indicó la enfermedad que tenía, lo cierto es que la demandada en sus cartas documento de fecha 27/10/2016, 30/11/2016 y 05/12/2016 reconoció de manera expresa la licencia de la actora. Asimismo, de la comunicación a la actora por parte de la demandada para que en fecha 29/10/2016 se presente al consultorio médico del Dr. René Federico Voigt para que presente el certificado médico (documento adjuntado por la demandada y reconocido por el actor en fecha 25/03/2022 CPD N°1), surge que la demandada tenía conocimiento de la enfermedad padecida por el actor. Es decir, del intercambio epistolar entre las partes, queda claro que Aegis Argentina S.A. estaba notificada de la situación de “licencia médica” del actor, que indicaba que estaba imposibilitado de reintegrarse a trabajar; no obstante lo cual -la parte demandada- insistía en su posición, en el sentido que el actor “podía reintegrarse”, alegando la existencia de “altas médicas” (informes médicos) que -siempre según la accionada- lo habilitaban para reintegrarse al trabajo.

Esta situación, claramente dese ser interpretada como un supuesto de “divergencia o discrepancia médica” entre el criterio de los médicos del actor, y de la demandada.

En ese contexto expuesto, lo que se advierte -y debe quedar claro- es que la demandada tenía conocimiento (había recibido aviso) de la enfermedad que decía seguir padeciendo el actor, como así también de las licencias médicas prescriptas por su galeno.

Sin embargo, a pesar de ello, se advierte que la demandada -mediante cartas documentos de fechas 27/10/2016, 30/11/2016 y 05/12/2016- lo intimó al Sr. Ferro Sardi a que se presente a trabajar, siempre argumentando dos supuestas altas definitivas de fecha 26/10/2016 dada por el Dr. Rene Federico Voigt y 22/11/2016 dado por el médico Pablo Herrera (que no fueron acreditadas en autos, ni con prueba documental, ni por ningún otro medio probatorio). Es más, la demandada no acompañó ninguna información respecto del efectivo cumplimiento de los controles del Art. 210 LCT, ni mucho menos “informes médicos” (de Dr. VOIGT y Dr. HERRERA) que indiquen que el actor está “apto” para reanudar sus tareas, ni nada por el estilo.

Asimismo, destaco que es la propia demandada quién “reconoce” la existencia de la enfermedad (del actor), no solo por haberlo citado al actor al consultorio del Dr. René Federico Voigt (mediante nota de fecha 29/10/2016) sino por invocar un “alta médica” en fecha 26/0/2016 y luego del 22/11/2016 (las cuales -

insisto- no acredita). En este sentido, me parece más que evidente, que cuando se expresa que le otorgó el “alta”, implícitamente está **reconociendo la existencia de una “enfermedad y licencia previa”**, y que -luego de repuesta la salud del actor, se le otorga el “alta”. Dicho de otro modo, no se puede otorgar un “alta”, **si previamente no se reconoció una enfermedad y otorgó una licencia; ya que esa licencia, casualmente, finaliza con el “alta”**.

En concreto, cuando afirmamos que alguien fue dado de “alta”, **implica reconocer que antes pasó por una enfermedad y licencia previa**. Por tanto, -insisto-, cuando la demandada cursó carta documento previo al despido donde expresa: **“lo intimamos a presentarse en su puesto de trabajo sito en calle Alberdi 165 de esta ciudad bajo apercibimiento de descuento de salario y ser desvinculado a su debito laboral”**, manifestando previamente que **se le había dado de “alta”**, está reconociendo que ese trabajador había estado enfermo (con licencia), y que luego mejoró y fue **dado de alta**. Y es sobre la base de ese “**reconocimiento**” de la **enfermedad y de licencia otorgada**, que ponemos foco en la **“falta de prueba del alta”** (que supuestamente se concretó el 22/11/2016), para sostener y concluir que al **no existir constancia del “alta médica” invocada**, debe interpretarse que el actor aún **se encontraba cursando un cuadro de enfermedad al momento en que la demandada decidió despedirlo (20/12/2016)**.

En definitiva, las pretendidas altas médicas del actor, que supuestamente habrían sido otorgada el 20/10/2016 (Dr. Voigt) y el 22/11/2016 (por Dr. Pablo Herrera), no constan acreditadas en la causa, por medio probatorio alguno.

En igual sentido, y ratificando el cuadro de salud del actor, a mayor abundamiento me parece necesario destacar que de la prueba testimonial de la Dra. María Rosa Fernández (en fecha 28/04/2022 agregado en el CPA N°5), surge acreditado que el actor en diciembre del 2016 (mes de despido) padecía trastorno por ansiedad, que fue muy bien descripto por la profesional en su respuesta 5. (ver respuestas N° 4 y 5, del cuaderno de pruebas A5, acta 28/4/22), destacándose que la testigo no fue tachada por el demandada.

Por otro lado, también sostengo que en el supuesto de haber existido **discrepancia entre los médicos del trabajador y del servicio médico de la empresa** (que incluso se puede inferir de la carta de despido, donde se hace referencia a las dos altas médicas, que no se probaron en autos), **aún así considero que la empleadora debió haber solicitado una junta médica oficial a la autoridad administrativa para que dirima la cuestión, ateniéndose al principio de buena fe y conservación del contrato o bien traer la cuestión a la justicia y retener el pago de los salarios a las resultas del proceso judicial por el período de inasistencia y no decidir despedirla de manera arbitraria y bajo el argumento de un alta médica que no acreditó**. Es decir, si alegaba que sus profesionales informaban que el actor estaba “de alta”, luego de haber recibido los TCL del trabajador, que daba aviso de la enfermedad; era obligación de la demandada (en el marco de la buena fe -Art. 63 LCT- y obligación genérica de actuar como buen empleador, con criterio de colaboración y solidaridad -Art. 62 LCT-), la de instar una junta médica (por parte de un tercero imparcial), que dirima la discrepancia de criterios médicos.

Al respecto, la jurisprudencia que comparto (respecto de los casos de divergencia médica entre los profesionales del actor y del demandado), tiene dicho que: *“si bien no hay una norma legal o convencional que imponga en forma expresa la obligación de la empresa de convocar a una Junta Médica ante tal discrepancia, el art. 62 de la LCT ha establecido como regla genérica el modo en que deben actuar las partes del contrato de trabajo. Esta pauta de conducta resulta a mi juicio aplicable al caso bajo análisis, en el que se deriva de las reglas de los arts. 208/210 de la LCT la necesidad de resolver, con criterio de colaboración y solidaridad, las descriptas controversias que se plantean, pues lo que se halla en juego es nada más ni menos que el ingreso económico que la ley ha previsto como sucedáneo del salario, único medio que, como regla, tiene el dependiente para atender a sus necesidades vitales y las de su familia”* (Sala IVª de la Cámara Nacional del Trabajo, IN RE: “Peralta, Marcos Eugenio c. Fischetti y Cía. S.R.L.”, Sentencia del 30/10/2009”, La Ley Online, AR/JUR/50190/2009).

8. En segundo lugar, y con relación al despido, destaco el actor reclamó mediante TCL de fecha 22/11/2016, 01/12/2016 y 07/12/2016 los haberes que le fueron descontados, lo que fue reconocido

por la demandada mediante carta documento de fecha 22/12/2016 N°+7986852-2 al expresar “*Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo transcripto en anterior CD Andreani, rechazamos deber de abonarle y/o reajustarle días de trabajo, los descuentos son procedentes, Ud. se encuentra apto para trabajar desde el día 22/11/2016...*”. **Es decir, surge reconocido por la demandada que le hizo descuentos por los días que se ausentó mientras se encontraba de licencia por enfermedad, reconocida por la demandada.**

En relación a la falta de pago de salarios de modo completo cabe recordar que el pago del sueldo completo es un deber fundamental que recae sobre el empleador (art. 74 de la LCT), cuyo incumplimiento tiene serias consecuencias patrimoniales y morales para el dependiente, dada la naturaleza alimentaria de la obligación insatisfecha. Por ello, salvo en los supuestos en que la ley expresamente exonere al empleador, no cabe receptar ningún tipo de excepción a esa obligación esencial (cfr. CSJT en autos "García Juan José vs. ABB S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia nro. 637 de fecha 11/05/2018).

El correcto y debido pago en tiempo y forma de las remuneraciones constituye una de las principales obligaciones impuestas por la LCT al empleador, debiendo ser cumplida en forma íntegra y en tiempo oportuno, ya que ello es un principio elemental en materia laboral: la intangibilidad del salario. El liso y llano incumplimiento de esta obligación legal o su cumplimiento parcial, no solamente confiere a la misma el carácter de pago insuficiente y a cuenta del total adeudado sino que, en ambos casos, constituye una grave injuria a los intereses del obrero que lo faculta a colocarse en situación de despido indirecto por exclusiva responsabilidad del principal.

En el presente caso, advirtiendo que la demandada en las cartas documentos de fecha 27/10/2016, 30/11/2016 y 05/12/2016 reconoció la licencia médica del actor (al haber manifestado un alta médica que no acreditó), surge que los descuentos (que reconoció en carta documento de fecha 22/12/2016) **fueron realizados cuando no había terminado, ni vencido, el plazo de reposo por dicha licencia médica, de la cual tomo conocimiento la demandada desde el primer momento.**

Por otra parte, se observa que del texto de las cartas documentos mencionadas (incluso la del despido), se puede inferir que la decisión unilateral que pretende obligar al Sr. Ferro Sardi a trabajar (pese a la divergencia médica sobre su cuadro de salud), implica que la accionada adoptó una conducta unilateral, claramente abusiva, apresurada, y **contraria a sus obligaciones de actuar con buena fe, y obligación genérica de conducirse con criterio de colaboración y solidaridad.**

Por otra parte, el hecho de haber notificado al actor al consultorio del Sr. Voigt para que presente certificado médico, no importa un verdadero interés de la demandada en realizar el control médico, al no constar en la causa haber realizado el control pertinente, lo que me permite concluir que la demandada no ejerció legítimamente las potestades que le concedía el art. 210 de la L.C.T. (de controlar la realidad de su enfermedad), sino que -por el contrario- sin haber acreditado la realización del control (al menos en estos autos), decide intimar al actor para que se reintegre a trabajar, argumentando dos altas médicas de fecha 26/10/2016 y 22/11/2016 que no acreditó, siendo su conducta -lo reitero- contraria al principio de buena fe, como también lesiva de la obligación genérica de actuar como buen empleador, con criterio de colaboración y solidaridad (Arts. 62, 63 y Cctes. LCT).

Además, y a mayor abundamiento, del expediente administrativo 17463/181-FS-2016 se observa que **el trabajador buscó una salida alternativa para presentar el certificado médico ante el rechazo de la demandada,** demostrando un actuar conforme criterio de colaboración y solidaridad en busca de mantener o conservar el empleo.

En consecuencia, la demandada teniendo conocimiento de la licencia por enfermedad del actor decidió intimarlo a que se reintegre a trabajar y efectuó los descuentos por ausencia injustificada, manejando y realizando el descuento de las remuneraciones del Sr. Ferro Sardi de manera arbitraria

y contraria a derecho; es decir, considero -por un lado- que frente a la divergencia de criterios médicos, no debía resolverlo unilateralmente disponiendo el despido directo; y -por otro lado- que frente a esa misma situación, tampoco podía proceder a descontar los haberes del trabajador (hasta que no se dirima la divergencia médica); razón por la cual, la conducta de la demandada, y el despido dispuesto, deben ser considerados como contrarios al principio de buena fe (Art. 63 LCT) y al deber de actuar genéricamente con criterio de colaboración y solidaridad (Art. 62 LCT).

Finalmente, y no me parece un dato menor, que la demandada -frente a las ausencias del actor al trabajo- decide “despedirlo” (romper el contrato de trabajo), sin haber justificado previamente haber aplicado -si considera que el actor incurría en inconductas, al incumplir el débito laboral- en sanciones previas y proporcionales (a la supuesta falta cometida: ausencias); lo que me lleva a concluir -a mayor abundamiento- que la demandada tampoco ejercitó sus potestades disciplinarias en forma paulatina, gradual y proporcional, sino que -ante las ausencias- directamente decide el despido, sin haber aplicado ningún correctivo previo; que a todo evento, permitiría pensar que tenía intenciones de respetar el principio de “conservación de contrato de trabajo” (Art. 10 LCT).

En mérito a todo lo expuesto, puedo concluir que **el despido directo dispuesto por la demandada en fecha 20/12/2016 resulta a todas luces contrario a derecho, y por lo tanto, debe ser considerado injustificado; es decir, debe ser encuadrado como un despido directo sin justa causa; que genera derechos indemnizatorios en cabeza del actor.** Así lo declaro.

VIII. TERCERA CUESTIÓN: Prescripción de los reclamos. En su caso, la procedencia de cada uno de los mismos.

VIII. 1. PRESCRIPCION. ACLARACIÓN PRELIMINAR.

La demandada opone defensa de prescripción de todos aquellos rubros y/o créditos reclamados por el actor.

En primer lugar, argumenta que el actor fue despedido el 19/12/2016.

En segundo lugar, sostiene que la demanda del actor fue interpuesta el 28/03/2019, más de 2 años del último acto con actitud interruptiva de la prescripción, efectuada por el actor.

Alega incluso, que la demanda -por sí misma- no tiene efecto interruptivo de la prescripción, ya que es un acto unilateral del actor, que no llega a conocimiento de la demandada; siendo la notificación del traslado de la demandada (del 10/03/21), el acto que -según la demandada- debe considerarse con aptitud interruptiva del curso de la prescripción.

Finalmente, alega y finaliza su planteo, expresando lo siguiente: *“En virtud de lo expuesto, queda claro que el crédito del actor se encuentra prescripto desde el 03/03/19, pues no efectuó intimación, acto administrativo o judicial suficiente, para interrumpir su plazo en tiempo oportuno”* (textual, ver fs. 3 de la contestación de demanda. Lo subrayado, me pertenece).

El actor contestó traslado de prescripción sosteniendo que los créditos laborales no se encuentran prescriptos ya que el tramite administrativo ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Tucumán suspendió el plazo de prescripción hasta 6 meses a lo que se debe adicionar los telegramas remitidos por el actor.

La CSJN dejó dicho en términos generales que *«la prescripción es una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos»*(C.S.J.N., «Fallos», 191- 490; 204-626 2).

En el caso de autos, la parte demandada dedujo la prescripción de “todos” los rubros y créditos reclamados por el actor, por los argumentos expuestos precedentemente.

El planteo defensivo debe ser examinado y decidido, teniendo en cuenta que -más allá de algunas imprecisiones que se pueden advertir en el contenido del mismo- deja en claro que deduce la defensa de prescripción, respecto de “todos” los créditos reclamados; brindando detalles de las fechas y actos que considera relevantes (demanda, actuaciones en sede administrativa, etc.) para decidir el planteo defensivo.

En primer lugar, diré que se equivoca la demandada al sostener que el despido operó el 19/12/2016, ya que el sello fechador de la carta de despido (fecha de la imposición de la misma, que se tomó como fecha del distracto), claramente acredita que la misiva fue enviada el 20/12/2016; y no el 19/12/16, como pretende la demandada.

En segundo lugar, también se equivoca al sostener que el último acto interruptivo de la prescripción fue la audiencia en la Secretaría de Trabajo, de fecha 03/03/2017 (a la que la propia demandada le asigna efecto interruptivo), toda vez que está acreditado en dicho Expte. Administrativo n° 17.463/181/FS/2016 tramitado por ante la Secretaría de Estado de Trabajo, que en el marco y tramitación del mismo, luego de las parte demandada solicitar un “cuarto intermedio” (ver acta del 03/03/2016 - fs. 13 del Expte.), la actora prestó conformidad con ese cuarto intermedio, y se fijó nueva fecha de audiencia para el 27/03/2017; fecha ésta última, que también se realizó acta, donde se documentó que el actor no había concurrido, pero en esa misma audiencia la Conciliadora (Dra. CECILIA INES ELLI), recibe escrito/presentación de la parte demandada (ver cargo del escrito de fs. 19 del Expte., que indica recibido el 27/3/17 hs. 10:45), fijando posición y solicitando el “archivo de las actuaciones”. Es decir, la audiencia del 27/3/2017, fue llevada adelante con una de las partes, que fijó posición y solicitó el archivo de las actuaciones, que se cumple en el año 2019. (26/3/19).

Por tanto, queda claro que resulta errónea la afirmación que la última interrupción fue el 03/3/17; toda vez que el expediente administrativo tramitado ante la Secretaría de Estado y Trabajo (Expte. n° 17.463/181/FS/2016), continuo sustanciándose -al menos- hasta el 27/03/2017, fecha en la cual se solicitó el archivo de las actuaciones, por la demandada; archivo este, que recién fue cumplido el 26/3/19 (constancia fs. 22 del referido Expte).

En consecuencia, considero que se debe aplicar al caso, las previsiones del Art. 257 LCT, que indican que la tramitación administrativa tiene efecto interruptivo (en rigor, suspensivo) por el plazo máximo de 6 meses.

Por otro lado, también se equivoca la demandada cuando afirma que la acción judicial fue interpuesta el 28/03/2019, toda vez que la demanda judicial tiene sello fechador de mesa de entradas civil del día 27/03/2019 (estampado en la propia demanda y actuaciones agregadas). **Es decir, me queda claro que la demanda, fue deducida o presentada en Mesa de Entradas, el día 27/3/2019. Así lo declaro.**

Es más, a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que las actuaciones firmadas por la Dra. SOFÍA GABRIEL SAGUIR (Secretaria de Mesa de Entrada Civil), dejan constancia que la presentación del Sr. FERRO SARDI ingresó el 27/03/2019 a horas 11:18, sorteándose e Juzgado del Trabajo de la IIª Nominación (ver actuaciones de fs. 7 del Expte. papel que tengo a la vista).

Por lo tanto, considero que la demanda presentada el 27/03/2019, ha logrado interrumpir el curso de la prescripción de los créditos indemnizatorios del actor antes de que opere la prescripción de los mismos (tomando en cuenta la celebración de la audiencia en la Secretaría de Trabajo, del 27/03/2017); esto es, la demanda fue deducida antes de vencer el plazo de dos (2) años previsto en Art. 256 LCT, toda vez que el despido fue el 20/12/16, y en esa fecha ya estaba en trámite el expediente administrativo (impidiendo que avance el curso de la prescripción), e incluso ese mismo día 20/12/16 el propio actor formalizó una nueva presentación en dicho expediente (sello fechado del 20/12/16, de la nota presentada por el actor en dicho trámite); lo que implica que ese trámite administrativa seguía el curso, y evitó que comience a correr el plazo de prescripción de los rubros

del despido.

Así las cosas, desde el 27/3/2017 (fecha de la última **audiencia en Secretaría de Trabajo**), en la que participó la demandada y presentó el escrito pidiendo el archivo de actuaciones, hasta la fecha de la presentación de la demanda (27/03/19), no operó la prescripción de los créditos y rubros indemnizatorios reclamados en la misma, conforme planilla de fs. 6 del Expte.; esto es, los créditos enunciados en la planilla de fs. 6, a saber: indemnización por antigüedad; preaviso, SAC, vacaciones (14 días), SAC s/Preaviso, Integración mes despido), SAC s/Integración, y Multa Art. 2 ley 25.323).

Como consecuencia de todo lo expuesto, teniendo en cuenta las constancias de autos, actuaciones administrativas antes examinadas (que fueron ofrecidas como prueba), concluyo que los créditos/rubros antes mencionados (indemnización por antigüedad; preaviso, SAC, vacaciones, SAC s/Preaviso, Integración mes despido, SAC s/Integración, y Multa Art. 2 ley 25.323) **NO SE ENCUENTRAN PRESCRIPTOS**, debiéndose rechazar la defensa respecto de los mismos; y sin perjuicio del análisis que se realizará más adelante, sobre la procedencia, o no, de cada uno de ellos. Así lo declaro.

En tal sentido, la Jurisprudencia que comparto ha dejado muy en claro que **“la demanda contra el deudor”** tiene efectos interruptivos de la prescripción, al expresar: *“Es pertinente recordar que el art. 3986 C.Civ. considera interruptiva a la “demanda contra el deudor”, y que la jurisprudencia nacional ha considerado que otros actos procesales pueden equipararse a una “demand*a”, a los efectos interruptivos de la prescripción, pero dichos actos siempre han consistido en presentaciones judiciales nunca administrativas. Esta interpretación extensiva ha sido la que ha sido reconocida en el nuevo código civil, que ha reemplazado la palabra “demanda” por “toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial” (art. 2546). Pero además es la opinión la doctrina nacional. Así Rezzonico afirma que **“por demanda debe entenderse “cualquier reclamo judicial de esa u otra obligación”** (Rezzónico, Luis María, Estudio de las Obligaciones, T. II, Depalma, Buenos Aires, 1961, p. 1138; Moisset de Espanés, afirma que debe tratarse de un **“reclamo entablado ante la justicia”** (Moisset de Espanés, Luis, Prescripción, Advocatus, Córdoba, 2004, p. 52. La CSJN, ha dicho también que **“por demanda (art. 3986 CCiv.) debe entenderse toda presentación judicial que traduzca la intención de mantener vivo el derecho de que se trate”** (CSJN, 7/11/89, “García, Alberto de Leonardo vs. Provincia de Formosa”, Fallos: 312:2134).” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo - JALIL SALOMON FERNANDO Y OTROS Vs. PROVINCIA DE TUCUMAN - s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Nro. Sent: 1477 Fecha Sentencia 28/09/2017).

En el caso, claro está, que el actor ha deducido demanda reclamando los créditos indemnizatorios del despido, antes de cumplirse los dos (2) años previstos en el Art. 256 LCT, teniendo en cuenta los efectos interruptivos (en rigor, suspensivos), del trámite administrativo ante la Secretaría de Estado de Trabajo; razón por la cual, la prescripción no debe prosperar, respecto de los créditos indemnizatorios reclamados en el escrito inicial de demanda (planilla de fs. 6). Así lo declaro.

Distinta suerte tendrán los créditos por **“diferencias salariales”** (punto IX del escrito de Ampliación de la Demanda) y **“Multa del Art. 1 ley 25.323”** (punto VII del escrito de Ampliación de la demanda); créditos éstos, que no habían sido incluidos en la demanda inicial (presentada el 27/3/19), y además, nunca fueron objeto de intimación alguna.

En concreto, me queda claro -de la simple lectura de la demanda y su planilla- que dichos reclamos/créditos (Diferencias Salariales y Multa Art. 1 ley 25.323), no fueron incluidos en el escrito inicial de la demanda, ni en la planilla presentada (en la que solamente se reclamó la Multa del Art. 2 ley 25.323); razón por la cual, dichos rubros/créditos, no están beneficiados por el efecto interruptivo de la prescripción que generó la demanda judicial (al no estar incluidos en la misma), y al haber sido reclamados al deudor recién en el escrito de **“ampliación de la demanda”** (escrito de 26/02/2021).

En consecuencia, y más allá de la falta de determinación clara y concreta del reclamo de diferencias salariales, y la poca claridad del reclamo de Multa Art. 1 ley 25.323, igualmente advierto que estos reclamos sí deben considerarse prescriptos, porque -lo reitero- recién fue ejercitados en fecha

26/02/2021 (ampliación de la demanda); esto es, cuando ya había transcurrido largamente (y prescripto) la acción para reclamar los mismos; siendo del caso agregar que el reclamo de “diferencias salariales” es un crédito de “nacimiento mensual” (nace mes a mes), y por lo tanto, ese reclamo que involucra dos (2) años anteriores al distracto, por lo que están claramente prescriptos. Así lo declaro.

VIII.2. Habiendo decidido sobre la prescripción, se analizará el reclamo formulado por el actor, respecto de los créditos que estaban incluidos en la demanda presentada el 27/03/2019, para verificar la procedencia, o no, de cada uno de los mismos.

VIII.2. a.- En primer lugar, en relación a la determinación de la base de la remuneración que se tomará en cuenta para el cálculo de los rubros reclamados, expresamente la parte actora solicitó que se tome el **suelo básico, el presentismo y la antigüedad de una Vendedora B del CCT 130/75** para la fecha del distracto (ver planilla de fecha 26/02/2021). Al respecto, aclaro que si bien hago referencia a la planilla de la ampliación de la demanda, no es menos cierto que ya había sido interrumpida la prescripción (de los créditos) con la demanda, conforme fuera examinado anteriormente.

Por lo tanto, resulta perfectamente posible y compatible con dicho razonamiento, examinar la base del reclamo teniendo presente el escrito de demanda y su ampliación.

Igualmente, considero importante puntualizar lo que fue expresamente reclamado en el escrito de demanda y ampliación, ya que de sus términos explícitos y del contenido de la contestación respectiva, ha quedado establecido el “tema decidendum” y la respectiva “traba de la litis”, lo que me coloca en la obligación de respetar dichos parámetros, básicamente, el de los reclamos concretos y sus planillas respectivas, para evitar caer en excesos que pudieren ser causal de nulidad del pronunciamiento; ya que la CSJN ha tenido oportunidad de ratificar que “la vigencia real de la garantía constitucional de la defensa en juicio, reclama el acatamiento del denominado principio de congruencia o correspondencia” (Fallos: 237:328; 256:504, entre muchos otros); como también ha tenido oportunidad de descalificar los pronunciamientos judiciales que contienen un claro apartamiento de los términos en que quedó trabada la litis, lo cual se consideró inconcebible dentro de una racional administración de justicia, según clásica definición dada por la Excma. Corte Nacional en la causa “Estrada, Eugenio” (Fallos: 247:713). Puede verse, en este mismo sentido, “Mansilla, Carlos Eugenia c/Fortbenton Co. Laboratories S.A. y Otros s/Despido” (Fallos: 337:179), Sentencia del 06/3/2014).

En mérito a lo expuesto, con la finalidad de no incurrir en violación al principio de congruencia, ni lesionar las garantías constitucionales de defensa en juicio pues la accionada se defendió sobre lo expresamente planteado por la actora, se decide que en esta sentencia se calcularán los rubros -para el caso que sean procedentes, y respecto de los cuales se rechazó la defensa de prescripción- dentro de los límites expresados por la parte actora en la demanda y ampliación; por tanto, tomar como base para el cálculo de los rubros reclamados el **básico, la antigüedad y el presentismo** de un trabajador categoría **Vendedora B del CCT 130/75**, jornada completa (que es lo que surge de la base de cálculo reclamada), y con fecha de ingreso el 10/11/2014 y de egreso el 20/12/2016. Así lo declaro.

VII.2. Determinadas las cuestiones precedentes, corresponde determinar la cuantía y la procedencia de los rubros reclamados por la accionante, razón por la cual, se procederá al análisis de cada uno de ellos a los fines de su determinación.

Formulada las aclaraciones precedentes, pasaré a analizar y resolver cada reclamo.

1) Indemnización por antigüedad: este rubro pretendido resulta procedente, en atención a que la extinción del vínculo laboral se produjo mediante despido directo injustificado y no consta acreditado el pago total. Su cuantía se determinará en la planilla que forma parte de la presente sentencia,

tomando como base de cálculo los importes determinados en los párrafos anteriores para la categoría de Vendedor B de jornada completa (escala salarial con el básico, antigüedad y presentismo), según Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 aplicable a la relación; artículo 245 de la LCT, y la antigüedad que tenía el actor en el empleo, computada desde su fecha de ingreso el día 10/11/2014 y la de egreso el día 20/12/2016. Los importes serán calculados en la planilla respectiva. Así lo declaro.

2) Preaviso: Conforme surge de las constancias de autos, el rubro reclamado resulta procedente atento a lo dispuesto por los artículos 231 y 232 de la LCT, pues el despido directo fue declarado injustificado y no consta acreditado su pago. Su cuantía se determinará en la planilla que forma parte de la presente sentencia, conforme las pautas antes mencionadas.

3) SAC. Si bien en la demanda se refiere al “AGUINALDO”, queda claro que es idéntico al SAC. Sin embargo, no indica con precisión a qué semestre correspondería. No obstante esa falta de claridad, considero que dada las fechas del reclamo, el actor reclama el SAC 2° semestre 2016; el cual surge que fue abonado, conforme recibo agregado a las actuaciones administrativas. (ver recibos de fs. 21, que da cuenta del pago de SAC proporcional). Por lo tanto, solamente puede prosperar en lo “pagado de menos” (conforme pautas antes establecidas), que será calculado en la planilla que forma parte de la presente.

4) SAC s/ preaviso: Con respecto a la incidencia del SAC sobre el preaviso, no existe constancia de pago del mismo. Por lo tanto, y conforme lo establecido por la CSJT en su fallo “Domínguez Rodolfo vs. Vicente Trapani” -sent. nro. 107 del 07.03.12- sobre el modo de su consideración, el mismo se lo debe adicionar en la planilla de cálculos, en base a su incidencia sobre el preaviso. Los importes serán calculados en la planilla respectiva. Así lo declaro.

5) Haberes mes de despido/dic. 2016 (20 días): En razón de haberse extinguido la relación el 20/12/2020 y no constando acreditado su pago en autos, corresponde declarar la procedencia del reclamo, cuyo importe será calculado en la planilla que forma parte de la sentencia. Así lo declaro.

6) Integración mes de despido y SAC s/integración: los rubros reclamados devienen procedentes en virtud de que la causa del despido configurado por la demandada fue declarada injustificada; por la fecha en que se extinguió el contrato laboral y por no constar acreditado su pago. Sus importes serán calculados en la planilla a practicarse en autos, conforme la base ya señalada y previsiones de artículo 233 de la LCT. Así lo declaro.

En cuanto al SAC sobre la integración mes de despido, en consonancia con los fallos que sustentan los rubros precedentes que consideran al sueldo anual complementario parte integrante de la remuneración obligatoria debida a quien trabaja en relación de dependencia como accesorio necesario, con la particularidad de que su pago está diferido en el tiempo (Art. 122 LCT). Dado que por una ficción legal el despido producido con responsabilidad indemnizatoria, se considera que surte plenos efectos a partir del primer día del mes siguiente, computándose los días faltantes como salarios por integración mes de despido, ese período devengaría SAC conforme el criterio minoritario del Plenario n° 322 Tulosai (02/04/2010), doctrina de la CSJT en Pessoa Alfredo y otros vs. SADAIC s/cobros (sent. 840 del 13/11/1998) ...en atención a que dicho concepto forma parte de la indemnización sustitutiva de preaviso (art. 233 2° párrafo LCT)" y más recientemente en Luna Gabriel vs. Castillo SACIFIA (sent. n° 835 del 17.10.13). En tal sentido, el segundo párrafo del art. 233 reza: ...Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido.... De este modo, resulta procedente su pago, cuando el despido no se produce el último día del mes, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 232 y 233 de la LCT. Así lo declaro.

7) Vacaciones (14 días): Acreditada la relación laboral, la fecha de su extinción (20 de diciembre 2016), y no existiendo constancia de pago del rubro (vacaciones prop. 2016), debe admitirse su reclamo. No dejo de tener presente que la demandada -en el escrito presentado en Secretaría de Trabajo el 27/3/2017, alegó que las vacaciones del denunciante "fueron gozadas en Noviembre de 2016" (ver punto 2 del escrito). Sin embargo, dicha postura es contradictoria con su posición vertida en el intercambio epistolar, donde intimaba al actor a presentarse a trabajar en esa fecha (Noviembre de 2016), siendo del caso agregar que -en dicha fecha- el actor probó haber notificado su estado de enfermedad. Por lo tanto, no estando acreditado el pago del rubro, y habiendo sucedido el despido dentro del plazo en que el actor tenía derecho aún a gozar de las vacaciones 2016, el rubro reclamado debe prosperar. Así lo declaro.

8) Multa art. 2 ley 25.323: Es aplicable al presente caso la doctrina legal sentada por el Excmo. Corte Suprema de Justicia de Tucumán en los autos "*Barcellona, Eduardo José vs. Textil Doss SRL s/ cobro de pesos*", sentencia N° 335, dictada el 12/05/2010, que sostuvo como requisito necesario para la procedencia de esta indemnización que el artículo 2 de la ley 25.323 exige que el trabajador curse una intimación fehaciente al empleador moroso a los efectos de otorgarle una última oportunidad para que éste adecue su conducta a las disposiciones legales. Y que la mora del empleador en el pago de las indemnizaciones de los trabajadores recién se produce luego de transcurridos los cuatro días hábiles de producida la extinción del vínculo, tal como se desprende del juego armónico de los artículos 128 y 149 de la LCT.

En consecuencia, conforme lo anterior, teniendo presente que la extinción del vínculo laboral se **produjo el 20/12/2016**, no habiendo el actor intimado el pago de las indemnizaciones de ley a la demandada con posterioridad a esa fecha, **este rubro no puede prosperar**. Así lo declaro.

VIII. CUARTA CUESTIÓN: intereses, planilla, costas y honorarios.

VIII.1. INTERESES: Teniendo en cuenta lo resuelto a las cuestiones precedentes, corresponde el tratamiento de los intereses a fin de ser considerado para el cálculo de los importes reclamados (en la medida que prosperan en cada caso), como también para el cálculo de los honorarios de los profesionales intervinientes. Para ello, considero necesario tener presente lo establecido por la jurisprudencia que ha dicho: *"Es el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en los autos "Olivares, Roberto Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo y otro s/ daños y perjuicios" (sentencia n.º 937/14): es función de los jueces de grado aplicar la tasa de interés que consideran adecuada para garantizar el justo resarcimiento del acreedor, lo cual debe ponderarse al momento del dictado de sentencia. En tal sentido, nuestro Máximo Tribunal expresó: "El juez debe aplicar, de conformidad al art. 768 del Código Civil, los intereses legales que las leyes especiales hubieren determinado. Como no existe norma legal alguna que determine de manera expresa la aplicación de la tasa pasiva o de la activa, es discrecional del juez determinar la tasa aplicable, teniendo en cuenta la finalidad resarcitoria de la norma y el contexto socio-económico existente al momento del fallo". Conforme a estos parámetros, cabe tener en cuenta que el proceso inflacionario que viene registrando nuestro país en los últimos años (acrecentado con la subida del dólar) es una realidad innegable que ha vulnerado el valor del crédito del trabajador -protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a nuestro Derecho Positivo, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenciones de la OIT, conforme artículo 75 inciso 22 de la C.N. En este contexto, es función primordial de los jueces de grado el de hacer prevalecer estos derechos constitucionales del trabajador; ello conlleva la facultad y el deber de fijar intereses acordes a la realidad socio económica del país, a fin de evitar que el deudor moroso quede colocado en una situación mejor luego del incumplimiento, lo que implicaría una injusta recompensa para quien no cumplió sus obligaciones en tiempo oportuno, todo en un marco de equidad y justicia. [...] Al respecto, esta vocal considera que la ampliación de la tasa activa resulta a todas luces prudente ya que no se trata de actualizar el crédito ni de indexarlo. El recargo que surge de la aplicación de esta tasa obedece a una finalidad distinta a la prevista por la Ley n.º 23928, y como una consecuencia derivada del incumplimiento del deudor. En efecto, la prestación a cargo de éste no se incrementa aquí por mecanismos indexatorios (que constituyen cuestiones de política económica a cargo de otros poderes del Estado), sino por los intereses generados por la mora incurrida, cuya*

determinación sí corresponde al Poder Judicial, conforme al artículo 768 del Código Civil y Comercial. Los tribunales de grado tienen facultades suficientes para aplicar a los créditos laborales la tasa de interés que consideren adecuada. Ello deriva de la naturaleza jurídica misma de los créditos involucrados y de las circunstancias de las partes, a la luz de una adecuada ponderación axiológica" (CAMARA DEL TRABAJO - Sala 3- BAZAN HECTOR JULIO Vs. PAPELERA TUCUMAN S.A. S/ COBRO DE PESOS. Nro. Expte: 1496/07. Nro. Sent: 93 Fecha Sentencia 30/09/2020).

Ahora bien, en uso de las facultades conferidas por la ley sustancial, y reconocidas por la Jurisprudencia del Címero Tribuna Provincial, en el caso que me ocupa -desde ya lo adelanto- **me voy a apartar de la aplicación de la Tasa Activa Banco Nación Argentina**, ya que el uso, o aplicación de la misma, **genera un verdadero “perjuicio” al trabajador**, resultando claramente **más “desfavorable”** (desde el punto de vista económico), que la corrección del crédito mediante el uso de **la Tasa Pasiva BCRA**.

Así las cosas, la aplicación -al caso concreto- de los índices e intereses de **Tasa Pasiva** conducen a una mejora económica para el crédito de la trabajadora; o dicho de otro modo, implica la utilización de una tasa de interés que resguarda mejor el crédito del trabajador, del envilecimiento y pérdida de su valor real por el mero transcurso del tiempo; lo que me permite concluir -en definitiva- que el uso de la tasa pasiva -insisto, para este caso concreto- resulta ser la utilización del criterio (de aplicación de la tasa de interés) que resulta más adecuado para la efectiva y mejor protección del crédito alimentario de la trabajadora, y -al mismo tiempo- implica optar por la aplicación de una norma, o de interpretación de la misma, en un sentido más favorable para el trabajador (Confr. Art 9 y Ctes. LCT), ya que el uso de la tasa de interés propuesta, genera una mayor tasa de interés y conduce a un mejor resguardo o mayor beneficio (desde lo económico), para proteger el crédito del actor, de la pérdida del poder adquisitivo, por el transcurso del tiempo, como se observó con las operaciones realizadas.

En consecuencia, y receptando las líneas directrices de Nuestro Superior Tribunal Provincial (caso: *“Olivares, Roberto Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo y otro s/ daños y perjuicios”* (sentencia n.º 937/14), que -lo reitero- nos dice que **“el procedimiento previsto... para el cálculo de los intereses (), encuentra fundamentos suficientes en el fallo atacado, a su vez, se enmarca en los límites de lo razonable y constituye un ejercicio regular de la prudente discreción de los jueces de la causa,... en especial, cuando tenemos en cuenta la naturaleza del crédito reclamado. Es que al igual que otros elementos de determinación judicial (v.gr.: daño moral) en la fijación de la tasa de interés judicial aplicable en cada caso, la discrecionalidad del Juez tiene mayor amplitud, libertad y posibilidades para encontrar parámetros en la determinación final de la misma y su adecuación a las circunstancias del caso. En suma, el procedimiento para el cálculo de los intereses constituye una cuestión propia de la prudente valoración de los jueces”** (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal OLIVARES ROBERTO DOMINGO Vs. MICHAVILA CARLOS ARNALDO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Nro. Sent: 937 Fecha Sentencia: 23/09/2014); **concluyo que -en el caso concreto- el crédito de la trabajadora será corregido utilizando el índice de la Tasa Pasiva del BCRA**. Así lo declaro.

De ese modo, debe quedar claro que la tasa de interés para calcular la deuda desde que cada suma es debida hasta la fecha de confección de la presente sentencia (30/04/2023), **será la tasa pasiva BCRA**, conforme lo ya considerado; y para el supuesto que el importe adeudado (conforme la planilla antes mencionada) no sea abonado en tiempo y forma por el deudor (*esto es, una vez firme la presente, y luego de vencido el plazo de 10 días para su depósito judicial* - Confr. Art. 156 CPL), **la deuda determinada en la presente resolución devengará un intereses de Tasa Activa** de la cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, la que se calculará sobre el capital consolidado de la condena (calculado al 30/04/2023), **comenzando los mismos a correr una vez vencido el plazo de diez (10) días previsto por el Art. 156 CPL**, y si la parte condenada no hubiera depositado el importe calculado como importe total de la sentencia (al 30/04/2023). Así lo declaro.

Finalmente, me parece importante establecer -y distinguir- dos cuestiones que se pueden presentar, relativas a la aplicación de los intereses sobre la deuda reconocida en la presente resolución, a saber:

a) En primer lugar, y con el objetivo de asegurar el cumplimiento puntual -en tiempo y forma- de la condena de sentencia, se establece que la deuda calculada (deuda consolidada) en “la planilla de condena” (que incluye capital e intereses hasta el 30/04/2023), deberá ser cumplida dentro del plazo de 10 días de intimado el cumplimiento de la sentencia (Confr. trámite previsto por los Arts. 145, 146 y Cctes. CPL). Y para el supuesto que la parte condenada no cumpliera con el pago del monto total sentenciado, dentro del plazo concedido, se le deberá aplicar un interés moratorio sobre el total de la deuda consolidada y liquidada en la presente sentencia (capital e intereses - confr. Art. 770 inc. “C” del C.C.y.C de la Nación); y dichos intereses correrán desde la fecha de la mora (en cumplir la sentencia), esto es, desde el vencimiento del plazo otorgado para cancelar el importe total de la sentencia; y en adelante y hasta el efectivo e íntegro pago; se tendrá siempre en consideración los intereses de la Tasa Activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuentos a 30 días vencida, que se dejan establecidos en el presente pronunciamiento.

b) En el caso que el deudor cumpliera con el pago (en tiempo y forma, y sin caer en mora en el pago respecto del pago de la sentencia; esto es, del importe de la liquidación judicial practicada en la planilla anexa a la presente), solamente se deberán calcular los intereses devengados desde que cada suma es debida (conforme directrices de los Arts. 128, 255 bis y Cctes. de la LCT), hasta la fecha del total, efectivo e íntegro pago de la deuda. Es decir, en este caso, no se capitalizarán los intereses antes mencionados (los de la liquidación judicial que se practica en la presente, Confr. Art. 770 inc. “C” del C.C.y.C de la Nación), sino que se deberá calcular intereses sobre el “capital” de cada condena (y no sobre la deuda consolidada y liquidada en la presente), los que se computaran sobre los montos/rubros condenados, desde que cada suma es debida (conforme las previsiones de la LCT y normas complementarias), hasta el total y efectivo pago; y siempre -lo reitero- tomando en consideración los intereses de la Tasa Activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuentos a 30 días vencida, que se dejan establecidos en el presente pronunciamiento. Así lo declaro.

En virtud de lo considerado en forma precedente, se practica la siguiente:

VIII.3. PLANILLA (Liquidación Judicial - confr. art 770 CCyC de la Nación)

NombreFerro Sardi Bruno
Fecha Ingreso10/11/2014
Fecha Egreso20/12/2016
Antigüedad2a 1m 10d
Antigüedad Indemnización2 años
Categoría CCT 130/75Vendedor B
JornadaCompleta

Base Remuneratoria
Básico\$ 13.517
Antigüedad\$ 270
Presentismo\$ 1.149
Bruto\$ 14.936

Cálculo Capital e Intereses de Rubros Condenados

Rubro 1: Indemnización por antigüedad\$ 29.872,00

$\$14936 \times 2 =$

Rubro 2: Preaviso y Sac s/preaviso\$ 16.180,67

* *Preaviso:* $\$14936 \times 1 = \$ 14.936,00$

* *Sac s/preaviso* $\$14936 / 12 = \$ 1.244,67$

Rubro 3: Haberes mes de despido\$ 9.636,13

$\$14936 / 31 \times 20 =$

Rubro 4: Integración mes de despido y Sac s/integración mes de despido **\$ 5.741,53**

* *Integración:* $\$14936 / 31 \times 11 = \$ 5.299,87$

* *Sac s/integración* $\$5299,87 \$ 441,66$

Rubro 5: Vacaciones proporcionales\$ 8.131,82

$\$14936 / 25 \times (14 \times 350 / 360) =$

Rubro 6: Sac proporcional\$ 2.898,17

$\$14936 / 360 \times 170 =$ **\$ 7.053,11**

(-) *menos liq. Abonada Sec.Trabajo-* \$ 4.154,94

Total Rubros 1 al 7 en \$ al 20/12/2016\$ 72.460,32

Intereses Tasa Pasiva BCRA desde 20/12/2016 al 30/04/2023 **484,40%** \$ 350.997,77

Total Rubros 1 al 7 en \$ al 30/04/2023\$ 423.458,09

VII.3. COSTAS

Respecto del reclamo de la parte actora, debo expresar que en numerosos antecedentes, nuestra Corte Suprema local ha destacado que *“la noción de vencido se establece con una visión global del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y resultados”* (cfr. CSJT, sentencia n° 699, 23/8/2012, “Vega, Julio César vs. Arévalo, Ramón Martín s/ cobro de pesos”; sentencia n° 415, 7/6/2002, “López, Domingo Gabriel vs. Nacul Uadi s/ salarios impagos y otros”; sentencia n° 981, 20/11/2000, “Reyna, Julio Andrés vs. Ingeco SA s/ indemnización por accidente de trabajo”; sentencia n° 687, 7/9/1998, “Fernández, Ramón Alberto vs. Bagley SA s/ cobros”, entre otras). Asimismo, tiene dicho *“que el hecho objetivo previsto en la ley procesal para determinar el carácter de vencedor o vencido en un pleito se manifiesta, en particular, por la derrota de la posición procesal sostenida por la parte y por el correlativo progreso de la posición procesal de la contraria”* (CSJT, sentencia N° 1.298, 5/9/2017, “Pérez, Luis Fernando vs. Caja Popular de Ahorros de Tucumán - ART SA s/ cobro de pesos”).

Compartiendo los lineamientos de nuestro Címero Tribunal local, considero que la parte **actora resultó sustancialmente ganadora** en las cuestiones medulares del pleito, ya que acreditó y logró la condena por el pago de la jornada completa y diferencias salariales, como también probó que el despido indirecto fue con justa causa (entre los temas relevantes del debate). Por consiguiente, y sin desconocer que existió un progreso parcial (porque no prosperó el rubro de la Multa art. 80 LCT), no es menos cierto que -en definitiva- la actora debe ser considerada vencedera.

En ese contexto, tratando de realizar una adecuada y equitativa imposición de las costas, teniendo en cuenta lo antes expresado, considero que la parte demandada cargará con el 100% de las costas propias, más el 80% de las generadas por la parte actora, cargando esta con el 20% de las propias. Así lo declaro.

VII.4 HONORARIOS

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc 2 de la ley 6.204.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inciso 1 de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto del capital de condena, el que según planilla que antecede asciende a la suma de **\$423.458,09 al 30/04/2023**.

Habiéndose determinado la base regulatoria, teniendo en cuenta la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 15, 38, 42 y concordantes de la ley N° 5.480, se regulan los siguientes honorarios:

A) Por el proceso de conocimiento

1) Al letrado Mario Eduardo Choquis, quien actuó como apoderado de la parte actora en media etapa de la presente litis, actuación cumplida en el doble carácter, la suma de \$17.503 (base regulatoria x 16% más el 55% por el doble carácter). Sin embargo, teniendo en cuenta lo previsto en el art. 38 in fine de la ley de honorarios que expresamente dice: "En ningún caso los honorarios del abogado serán inferiores al valor establecido para una (1) consulta escrita vigente al tiempo de la regulación", se procederá a regular el mínimo arancelario -una consulta escrita- ello por cuanto la aplicación de los porcentuales de ley, arrojan como resultado un monto inferior al mínimo garantizado por la ley arancelaria. A respecto, debo aclarar que ese mínimo garantizado, no podría ser "alterado" en más, por la circunstancia que haya intervenido más de un abogado en la causa, por la misma parte. Sobre el tema, considero que el Art. 38 in fine, debe ser aplicado conjuntamente con el Art. 12 ley 5480, que indica: "cuando actuaren sucesivamente, el honorario correspondiente se distribuirá en proporción a la importancia jurídica de la respectiva actuación y a la labor desarrollada por cada profesional.". Es decir, el Art. 38, párrafo final, de la ley 5480, que hace referencia al valor de *una consulta escrita, como honorario mínimo*, para el profesional, no puede ser interpretado aisladamente, de modo tal, de garantizar una consulta mínima por cada profesional que actué en la causa, prescindiendo de la actuación sucesiva (art. 12), sino que -por el contrario- el artículo 38 in fine debe ser interpretado en forma armónica con lo dispuesto por el Art. 12 de la ley arancelaria; y de ese modo, respetar el valor de una *consulta escrita* (fijada por el Colegio de Abogados, como pauta de honorarios mínimo), pero distribuyendo proporcionalmente su importe, entre los letrados beneficiarios de esa regulación. **En consecuencia, le corresponde la suma de \$25.833** (valor consulta escrita más el 55% del doble carácter x 0,25 proporcional a su actuación en forma continua). En tal sentido, la Jurisprudencia que comparto, tiene dicho: *"Los letrados actuaron en el proceso de manera conjunta como patrocinantes del actor, por lo que habrá que atender a lo previsto en el art. 12 de la ley 5480 que establece que "cuando actuaren conjuntamente varios abogados o procuradores por una misma parte, a fin de regular honorarios se considerará que ha existido un solo patrocinio o una sola representación, según fuere el caso". Ahora bien, aplicando las pautas previstas en la ley 5.480, especialmente el art. 38 in fine, asiste razón al apelante. Esto es así ya que, el honorario mínimo que corresponde por aplicación del art. 38 último párrafo, debe ser meritulado a la luz de lo dispuesto por su art. 12. De la interpretación armónica de estas dos disposiciones surge que, la regulación efectuada por el a quo ha superado el mínimo establecido en el mencionado precepto legal, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la sentencia de honorarios en este punto y distribuir proporcionalmente entre los letrados beneficiarios de regulación la consulta mínima vigente. La decisión acordada se justifica más aun en juicios de escaso monto, como el presente, en virtud del principio de proporcionalidad que debe guardar entre la regulación y el asunto debatido, para evitar un estipendio desvinculado de las constancias de la causa*

.” (CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - CONCEPCION - Sala Única - LEDESMA LUIS ALBERTO Vs. SEGUROS RIVADAVIA S/ AMPARO - Nro. Sent: 121 Fecha Sentencia 23/06/2015. ÍDEM: Sentencia N°.: 81 "Tarjeta Naranja S.A. Vs. Díaz Pereyra Raúl Eugenio S/ Cobros (Sumario)" del 22/03/2011. CCCC.: Sala I.).

2) Al letrado Santiago Sal Paz. Siguiendo las mismas pautas indicadas en el apartado anterior, corresponde regular al letrado mencionado, por su actuación en la causa por la parte actora, en el doble carácter, como letrado apoderado en dos etapas y media etapa del proceso de conocimiento (actuando en forma sucesiva con la Dr. Choquis Mario Eduardo), el proporcional correspondiente, conforme lo considerado. En consecuencia, se le regulará la suma de \$ 129.167 (valor consulta escrita más el 55% del doble carácter x 0,75 proporcional a su actuación en forma continua).

2) A la letrada María Florencia Aramburu quien actuó como apoderado de la parte demandada en las tres etapas de la presente Litis, actuación cumplida en el doble carácter, la suma de \$67.437 (base regulatoria x 8% más el 55% por el doble carácter). Sin embargo, teniendo en cuenta lo previsto en el art. 38 in fine de la ley de honorarios que expresamente dice: *“En ningún caso los honorarios del abogado serán inferiores al valor establecido para una (1) consulta escrita vigente al tiempo de la regulación”*, se procederá a regular el mínimo arancelario -una consulta escrita- ello por cuanto la aplicación de los porcentuales de ley, arrojan como resultado un monto inferior al mínimo garantizado por la ley arancelaria. En consecuencia, le corresponde la suma de \$155.000 (valor de la consulta escrita más el 55% por el doble carácter).

3) A la perito contadora María del Carmen Massa por el trabajo pericial presentado en la causa, se le regula la suma de \$16.938.- (4% de la escala porcentual del art. 51 del CPL).

RESUELVO:

I. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda promovida por **BRUNO FERRO SARDI**, DNI 33.815.672, en contra de **AEGIS ARGENTINA S.A.** con domicilio en calle Alberdi n° 165 de esta ciudad capital. En consecuencia, se condena a ésta al pago de la suma de **\$423.458,09 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS)**, en concepto de: (i) indemnización por antigüedad; (ii) indemnización sustitutiva de preaviso; (iii) SAC proporcional en la proporción pagada de menos; (iv) SAC s/ preaviso; (v) integración mes de despido; (vi) SAC s/ integración mes de despido; (vii) vacaciones proporcionales 2016; (viii) y haberes 20 días del mes de diciembre 2016. **ABSOLVER** a la demandada al pago de multa art. 2 ley 25.323.

II. HACER LUGAR A LA DEFENSA DE PRESCRIPCION opuesta por la demandada, respecto de los rubros (i) Multa art. 1 ley 25.323 y (ii) diferencias salariales.

III COSTAS e INTERESES: conforme son considerados.

IV. HONORARIOS: Regular honorarios por su actuación profesional en la presente causa conforme a lo considerado: Al letrado **Mario Eduardo Choquis**, la suma de \$25.833.- (pesos veinticinco mil ochocientos treinta y tres). Al letrado **Santiago Sal Paz**, la suma de \$129.167.- (pesos ciento veintinueve mil ciento sesenta y siete). A la letrada **María Florencia Aramburu**, la suma de \$155.000 (pesos ciento cincuenta y cinco mil). A la perito contadora **María del Carmen Massa**, la suma de \$16.938.- (pesos dieciséis mil novecientos treinta y ocho), conforme lo considerado.

V. PRACTIQUESE PLANILLA FISCAL, y notifíquese para la reposición de la misma, bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán.

VI. COMUNIQUESE a la Caja de Previsión y seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.

REGISTRESE, ARCHIVESE Y HAGASE SABER.

Ante mi.

PP-298/19

NRO. SENT.: 350 - FECHA SENT.: 29/05/2023

Firmado digitalmente por:
CN=JOGNA PRAT Ezio Enrique
C=AR
SERIALNUMBER=CUIL 20176149796
FECHA FIRMA=29/05/2023

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.



Expediente: 298/19
Carátula: FERRO SARDI BRUNO C/ AEGIS ARGENTINA S.A. S/ COBRO DE PESOS
Unidad Judicial: JUZGADO DEL TRABAJO II
Tipo Actuación: CEDULA CASILLERO VIRTUAL FIRMA DIGITAL
Fecha Depósito: 01/06/2023 - 00:00
Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:
306488157581201 - OFICIALES NOTIFICADORES CAPITAL

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

JUZGADO DEL TRABAJO II

ACTUACIONES N°: 298/19



H103024448955

PDC

San Miguel de Tucumán, 30 de mayo de 2023.-

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Movilidad : NO

AUTOS: FERRO SARDI BRUNO c/ AEGIS ARGENTINA S.A. s/ COBRO DE PESOS .

Expte n°: 298/19

Se notifica a: AEGIS ARGENTINA S.A. (EN LA PERSONA DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

Domicilio: ALBERDI 165

PROVEIDO

San Miguel de Tucumán, 29 de Mayo 2023.AUTOS Y VISTOS:...
RESULTA:...CONSIDERANDO:...RESUELVO:**I. HACER LUGAR PARCIALMENTE** a la demanda promovida por **BRUNO FERRO SARDI**, DNI 33.815.672, en contra de **AEGIS ARGENTINA S.A.** con domicilio en calle Alberdi n° 165 de esta ciudad capital. En consecuencia, se condena a ésta al pago de la suma de **\$423.458,09 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS)**, en concepto de: (i) indemnización por

antigüedad; (ii) indemnización sustitutiva de preaviso; (iii) SAC proporcional en la proporción pagada de menos; (iv) SAC s/ preaviso; (v) integración mes de despido; (vi) SAC s/ integración mes de despido; (vii) vacaciones proporcionales 2016; (viii) y haberes 20 días del mes de diciembre 2016. **ABSOLVER** a la demandada al pago de multa art. 2 ley 25.323.**II. HACER LUGAR A LA DEFENSA DE PRESCRIPCION** opuesta por la demandada, respecto de los rubros (i) Multa art. 1 ley 25.323 y (ii) diferencias salariales.**III COSTAS e INTERESES:** conforme son considerados.**IV. HONORARIOS:** Regular honorarios por su actuación profesional en la presente causa conforme a lo considerado: Al letrado **Mario Eduardo Choquis**, la suma de \$25.833.- (pesos veinticinco mil ochocientos treinta y tres). Al letrado **Santiago Sal Paz**, la suma de \$129.167.- (pesos ciento veintinueve mil ciento sesenta y siete). A la letrada **María Florencia Aramburu**, la suma de \$155.000 (pesos ciento cincuenta y cinco mil). A la perito contadora **María del Carmen Massa**, la suma de \$16.938.- (pesos dieciséis mil novecientos treinta y ocho), conforme lo considerado.**V. PRACTIQUESE PLANILLA FISCAL**, y notifíquese para la reposición de la misma, bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán.**VI. COMUNIQUESE** a la Caja de Previsión y seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.**REGISTRESE, ARCHIVESE Y HAGASE SABER.**Ante mí.PP-298/19.Fdo:DR. EZIO E. JOGNA PRAT - Juez PDC**QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-**

SECRETARIOS | MARÍA ALEJANDRA RASKA

BRUNO CONRADO DÍAZ

“En caso que la presente notificación contenga documentación adjunta accesible mediante Código QR y necesite asistencia para visualizarla, puede comunicarse, por WhatsApp o telefónicamente, con la Oficina de Atención al Ciudadano a los números: 3816042282, 3814024595, 3815554378 o 3815533492. Asimismo, puede dirigirse a las Oficinas de Atención al Ciudadano, ubicadas en los edificios del Poder Judicial o al Juzgado de Paz más cercano a su domicilio. Le recordamos que toda la información respecto a la ubicación y números de teléfonos del Poder Judicial, se encuentra disponible en la Guía Judicial del sitio: www.justucuman.gov.ar”

M.E. N° Recibido Hoy

Para su cumplimiento pase al Oficial Notificador. Sr:

Secretario Jefe

San Miguel de Tucumán,de en la fecha siendo horas
..... Notifiqué del contenido de esta cédula.

OFICIALES NOTIFICADORES,CAPITAL - 306488157581201

Firmado digitalmente por:
CN=RASKA Maria Alejandra
C=AR
SERIALNUMBER=CUIL 27340676454
FECHA FIRMA=31/05/2023

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

Expediente: **298/19**
Carátula: **FERRO SARDI BRUNO C/ AEGIS ARGENTINA S.A. S/ COBRO DE PESOS**
Unidad Judicial: **JUZGADO DEL TRABAJO II**
Tipo Actuación: **CEDULA CASILLERO VIRTUAL FIRMA DIGITAL**
Fecha Depósito: **01/06/2023 - 00:00**
Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:
306488157581201 - OFICIALES NOTIFICADORES CAPITAL

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

JUZGADO DEL TRABAJO II

ACTUACIONES N°: 298/19



H103024448969

PDC

San Miguel de Tucumán, 30 de mayo de 2023.-

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Movilidad : -Fecha: 30/05/2023 - 23254980099 SAL PAZ SANTIAGO PEDRO -Concepto: BONOS DE MOVILIDAD -Nro Comp: 217273485 -Monto: 168-Fecha: 30/05/2023 - 23254980099 SAL PAZ SANTIAGO PEDRO -Concepto: BONOS DE MOVILIDAD -Nro Comp: 217273485 -Monto: 168

AUTOS: FERRO SARDI BRUNO c/ AEGIS ARGENTINA S.A. s/ COBRO DE PESOS .

Expte n°: 298/19

Se notifica a: FERRO SARDI,BRUNO

Domicilio: AV. ALEM 595-6° PISO-DPTO. G.-

PROVEIDO

San Miguel de Tucumán, 29 de Mayo 2023.**AUTOS Y VISTOS:...**
RESULTA:...CONSIDERANDO:...RESUELVO:I. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda promovida por **BRUNO FERRO SARDI**, DNI 33.815.672, en contra de **AEGIS ARGENTINA S.A.** con domicilio en calle Alberdi n° 165 de esta ciudad capital. En consecuencia, se condena a ésta al pago

de la suma de \$423.458,09 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS), en concepto de: (i) indemnización por antigüedad; (ii) indemnización sustitutiva de preaviso; (iii) SAC proporcional en la proporción pagada de menos; (iv) SAC s/ preaviso; (v) integración mes de despido; (vi) SAC s/ integración mes de despido; (vii) vacaciones proporcionales 2016; (viii) y haberes 20 días del mes de diciembre 2016. **ABSOLVER** a la demandada al pago de multa art. 2 ley 25.323.**II. HACER LUGAR A LA DEFENSA DE PRESCRIPCION** opuesta por la demandada, respecto de los rubros (i) Multa art. 1 ley 25.323 y (ii) diferencias salariales.**III COSTAS e INTERESES:** conforme son considerados.**IV. HONORARIOS:** Regular honorarios por su actuación profesional en la presente causa conforme a lo considerado: Al letrado **Mario Eduardo Choquis**, la suma de \$25.833.- (pesos veinticinco mil ochocientos treinta y tres). Al letrado **Santiago Sal Paz**, la suma de \$129.167.- (pesos ciento veintinueve mil ciento sesenta y siete). A la letrada **María Florencia Aramburu**, la suma de \$155.000 (pesos ciento cincuenta y cinco mil). A la perito contadora **María del Carmen Massa**, la suma de \$16.938.- (pesos dieciséis mil novecientos treinta y ocho), conforme lo considerado.**V. PRACTIQUESE PLANILLA FISCAL**, y notifíquese para la reposición de la misma, bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán.**VI. COMUNIQUESE** a la Caja de Previsión y seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.**REGISTRESE, ARCHIVESE Y HAGASE SABER.**Ante mí.PP-298/19.Fdo:DR. EZIO E. JOGNA PRAT - Juez PDC**QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-**

SECRETARIOS | MARÍA ALEJANDRA RASKA

BRUNO CONRADO DÍAZ

“En caso que la presente notificación contenga documentación adjunta accesible mediante Código QR y necesite asistencia para visualizarla, puede comunicarse, por WhatsApp o telefónicamente, con la Oficina de Atención al Ciudadano a los números: 3816042282, 3814024595, 3815554378 o 3815533492. Asimismo, puede dirigirse a las Oficinas de Atención al Ciudadano, ubicadas en los edificios del Poder Judicial o al Juzgado de Paz más cercano a su domicilio. Le recordamos que toda la información respecto a la ubicación y números de teléfonos del Poder Judicial, se encuentra disponible en la Guía Judicial del sitio: www.justucuman.gov.ar”

M.E. N° Recibido Hoy

Para su cumplimiento pase al Oficial Notificador. Sr:

Secretario Jefe

San Miguel de Tucumán,de en la fecha siendo horas
..... Notifiqué del contenido de esta cédula.

OFICIALES NOTIFICADORES,CAPITAL - 306488157581201

Firmado digitalmente por:
CN=RASKA Maria Alejandra
C=AR
SERIALNUMBER=CUIL 27340676454
FECHA FIRMA=31/05/2023

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.